

PERIODO 122º



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

27ª REUNION – 21ª SESION ORDINARIA
6 DE OCTUBRE DE 2004

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI,
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor MARCELO A. H. GUINLE**

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ



SENADORES PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ARANCIO, Lylia M.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAR, Graciela Yolanda
 BUSSI, Ricardo Argentino
 CAFIERO, Antonio Francisco
 CAPARRÓS, Mabel Luisa
 CAPITANICH, Jorge Milton
 CAPOS, Liliana
 CASTILLO, Oscar A.
 CASTRO, María E.
 COLOMBO, María T.
 CONTI, Diana
 CURLETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 GALLEGU, Silvia E.
 GIRI, Haide D.
 GIUSTI, Silvia E.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GUINLE, Marcelo A. H.
 IBARRA, Vilma L.
 JAQUE, Celso A.
 JENEFES, Guillermo R.
 LEGUIZAMÓN, María L.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MARÍN, Rubén H.
 MARINO, Juan C.
 MARTÍN, Floriana N.
 MARTINAZZO, Luis E.
 MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
 MAZA, Ada M.
 MERA, Mario R.
 MIRANDA, Julio A.

MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 OCHOA, Raúl E.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PAZ, Elva A.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 PINCHETTI, Delia N.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RÍOS, Roberto F.
 ROSSI, Carlos A.
 SAADI, Ramón E.
 SALVATORI, Pedro
 SÁNCHEZ, María D.
 SANZ, Ernesto R.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo
 URQUÍA, Roberto D.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALÍA, José

AUSENTES, CON AVISO:

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
 GALLIA, Sergio A.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 ISIDORI, Amanda M.
 LATORRE, Roxana I.
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia E.
 MAYANS, Miguel A.
 MENEM, Eduardo
 MORALES, Gerardo R.
 SAPAG, Luz M.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. .)
2. Informe del jefe de Gabinete de Ministros. (Pág. .)
3. Lectura y aprobación del plan de labor. (Página .)
4. Modificación al plan de labor. (Pág. .)
5. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Pichetto, y otros señores senadores por el que se rechazan las declaraciones del señor Ignacio Walker (S.-3325/04). Se aprueba. (Pág. .)
6. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo

vo por el que se solicita acuerdo para designar al doctor Eduardo Rodolfo Freiler como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (P.E.-576/04). Se aprueba. (Pág. .)

7. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para nombrar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal al doctor Daniel Eduardo Rafecas (P.E.-577/04). Se aprueba. (Pág. .)
8. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Capital Federal al doctor Ariel Oscar Lijo (P.E.-578/04). Se aprueba. (Pág. .)

9. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal al doctor Guillermo Tristán Montenegro (P.E.-579/04). Se aprueba. (Pág. .)
10. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 de la Capital Federal al doctor Julián Daniel Ercolini (P.E.-580/04). Se aprueba. (Pág. .)
11. Pedido de pronto despacho del proyecto de comunicación del señor senador Zavalía por el que se solicita al señor presidente de la Nación el alejamiento del cargo de interventor federal de la provincia de Santiago del Estero del doctor Pablo Lanusse (S.-3.319/04). (Página .)
12. Consideración si se trata sobre tablas el proyecto de ley de la señora senadora Müller y otros señores senadores por el que se sustituye el artículo 34, de la ley 23.737, de estupeficientes (S.-1.222/03). (Pág. .)
13. Autorización a la Presidencia. (Pág. .)
14. Consideración del proyecto de ley del señor senador Prades y otros señores senadores por el que se modifica el artículo 34, de la ley 23.737, de estupeficientes (continuación) (S.-1.681/03). Se aprueba. (Pág. .)
15. Manifestaciones. (Pág. .)
16. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Turismo en el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros, sobre prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes (S.-3.24/03). (Pág. .)
17. Manifestaciones. (Pág. .)
18. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Turismo en el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros, sobre prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes (continuación). (S.-324/03). Se aprueba.
19. Asuntos entrados. (Pág. .)
20. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se expresa beneplácito por el 30° aniversario del funcionamiento de la Universidad de Entre Ríos (S.-643/03). Se aprueba. (Pág. .)
21. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se manifiesta beneplácito por la nominación como académica correspondiente en Mendoza a la doctora Martha Susana Páramo de Isleño (S.-3.081/03). Se aprueba. (Pág. .)
22. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se declara de interés parlamentario la actividad cultural de la fundación "A Puro Teatro" (S.-3.051/03). Se aprueba. (Página .)
23. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Müller por el que se manifiesta pesar por la muerte del general Hernán Pujato, primer expedicionario a pie al Polo Sur (S.-2.070/03). Se aprueba. (Pág. .)
24. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la inclusión del libro *Hotel Pioho's Palace*, de María Elena Walsh, en la selección de mejores cuentos infantiles del mundo (S.-384/03). Se aprueba. (Pág. .)
25. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de declaración del señor senador Guinle por el que se declara de interés del Senado de la Nación la realización del seminario denominado "La autonomía municipal en ejercicio, descentralización, municipio y desarrollo humano", a llevarse a cabo los días 7 y 8 de octubre en Comodoro Rivadavia, Chubut (S.-2.606/04). Se aprueba. (Pág. .)
26. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de Ministros con relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso sobre los estados financieros del

- de interés legislativo el curso “Calidad del servicio de sistemas eléctricos de potencia” (S.-3.286/04). (Página .)
- CCXXXVII. Proyecto de declaración del señor senador Salvatori, por el que se manifiesta beneplácito por el otorgamiento de la norma ISO a la represa de Alicurá (S.-3.287/04) (Pág. .)
- CCXXXVIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez, por el que se solicitan informes sobre el trueque de cueros de vicuña por cocaína, que se efectúa a través de la frontera con Bolivia (S.-3.288/04). (Pág. .)
- CCXXXIX. Proyecto de resolución de la misma señora senadora, por el que se declara de interés parlamentario el encuentro de los miembros de la Unión para la Naturaleza, a celebrarse en Bangkok (S.-3.289/04). (Pág. .)
- CCXL. Proyecto de ley del señor senador Cafiero sobre financiamiento de microcréditos para asociaciones civiles sin fines de lucro (S.-3.290/04). (Página .)
- CCXLI. Proyecto de resolución del señor senador Marino, por el que se rinde homenaje a La Pampa en un nuevo aniversario de la sanción de la ley 1.532 (S.-3.291/04). (Pág. .)
- CCXLII. Proyecto de resolución de la señora senadora Sapag y otros señores senadores, por el que se insta al Poder Ejecutivo nacional cumpla con los beneficios fiscales establecidos en la ley 25.080, de inversiones en bosques cultivados (S.-3.298/04). (Página .)
- CCXLIII. Proyecto de declaración del señor senador Gallia, por el que se manifiesta pesar por la muerte de Horacio Vicente Billoch Caride (S.-3.299/04). (Pág. .)
- CCXLIV. Proyecto de ley de las señoras senadoras Perceval y Gallego, por el que se crea el Observatorio de la Violencia Escolar (S.-3.300/04). (Página .)
- CCXLV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti, por el que se solicitan informes acerca de la AFJP Nación (S.-3.301/04). (Pág. .)
- CCXLVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Paz y otros señores senadores, por el que se adhiere al Día Internacional de la Mujer Rural (S.-3.302/04). (Pág. .)
- CCXLVII. Proyecto de declaración del señor senador Ochoa, por el que se adhiere a los festejos del Día de la Tradición, en la localidad de Buena Esperanza, San Luis (S.-3.303/04). (Página .)
- CCXLVIII. Proyecto de ley de los señores senadores Ibarra y Yoma, sobre régimen aplicable a los adolescentes que cometen delitos (S.-3.304/04). (Página .)
- CCXLIX. Proyecto de comunicación del señor senador Zavalía y otros señores senadores, por el que se solicita se disponga la remoción del doctor Pablo Lanusse como interventor de la provincia de Santiago del Estero (S.-3.319/04). (Pág. .)
147. Apéndice:
- I. Votaciones. (Pág. .)
 - II. Sanciones del Honorable Senado. (Página .)
 - III. Inserciones. (Pág. .)
- En Buenos Aires, a las 17 y 31 del miércoles 6 de octubre de 2004:
- Sr. Presidente.** — La sesión está abierta.
- 1**
- IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL**
- Sr. Presidente.** — Invito a la señora senadora por la provincia de Salta doctora Sonia Escudero, a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Escudero procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)
- 2**
- INFORME DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS**
- Sr. Presidente.** — Se informa a los señores

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de primera instancia en lo criminal y correccional federal N° 7 de la Capital Federal al doctor Guillermo Tristán Montenegro.

–El texto es el siguiente:

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal, doctor Guillermo Tristán Montenegro (DNI 16.156.529).

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.212

NESTOR C. KIRCHNER.

Horacio D. Rosatti.

Sr. Presidente. – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.

10

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 10 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de primera instancia en lo criminal y correccional federal N° 10 de la Capital Federal al doctor Julián Daniel Ercolini.

–El texto es el siguiente:

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del ar-

tículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 de la Capital Federal, doctor Julián Daniel Ercolini (DNI 16.150.449).

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.213

NESTOR C. KIRCHNER.

Horacio D. Rosatti.

Sr. Presidente. – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones

Sr. Pichetto. – Señor presidente: que quede constancia de la votación por unanimidad, y también, que se gire al Poder Ejecutivo a los fines de formalizar los decretos respectivos.

Sr. Presidente. – Así se hará.

11

PEDIDO DE PRONTO DESPACHO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo acordado en la reunión de labor parlamentaria del día de ayer, corresponde la consideración sobre tablas del proyecto...

Sr. Zavalía. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – ... de ley de la señora senadora Müller y otros señores senadores por el que se sustituye el artículo 34 de la ley 23.737.

Tiene la palabra el señor senador Zavalía.

Sr. Zavalía. – Señor presidente: quiero pedir la reserva en mesa, a fin de solicitar su pronto despacho, de un proyecto de mi autoría presentado el día de la fecha bajo el número de expediente S.-3.319/04.

Se trata de un proyecto de comunicación por el que se solicita al señor presidente de la Nación el alejamiento del cargo de interventor federal de la provincia de Santiago del Estero del doctor Pablo Lanusse, dado que ha transgredido deliberadamente la ley que autorizó la intervención a la mencionada provincia...

Sr. Presidente. – Cuando llegue el momento...

Sr. Zavalía. – ... por violación a la Constitución de la provincia de Santiago del Estero y a la

Constitución Nacional, a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Contabilidad.

Hay una corresponsabilidad por parte del Congreso de la Nación, más allá de que la designación del interventor de la provincia es una facultad del presidente de la Nación. Y desde el bloque de la Unión Cívica Radical, queremos hacer la salvedad de las graves irregularidades, que se transformarán en acciones penales y civiles y por las que, desde luego, la Nación deberá responder oportunamente.

Sr. Presidente. – Queda reservado.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Simplemente, como en otras oportunidades en que el senador Zavalía ha querido plantear omnirresponsabilidades, quiero dejar sentado que los senadores de la provincia de San Luis no votamos la intervención a la provincia de Santiago del Estero.

Sr. Presidente. – No está en debate el proyecto.

En su momento será evaluado.

12

MODIFICACION DE LA LEY 23.737 DE ESTUPEFACIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración del proyecto de ley de la señora senadora Müller y otros señores senadores por el que se sustituye el artículo 34 de la ley 23.737, de estupefacientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

–La votación resulta afirmativa.

–El texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

MODIFICACION A LA LEY DE ESTUPEFACIENTES

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 23.737 por el siguiente:

Artículo 34: Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, a excepción de los que tengan relación con la venta y distribución de estupefacientes y que sean perpe-

trados dentro de jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que serán de competencia de la justicia penal ordinaria de las distintas jurisdicciones si no fueran de competencia originaria de la justicia federal.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mabel H. Müller.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Los temas relacionados con el consumo y distribución de estupefacientes son un problema de difícil solución, a la cual podremos encaminarnos si todos los sectores de la sociedad colaboran y nos empeñamos en conjunto en lograrla. Día a día observamos como miles de jóvenes están siendo atrapados por diferentes adicciones basadas en el consumo de drogas de diferentes tipos y calidades.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en declaraciones recientes de sus funcionarios, admitió que en ámbitos escolares de la ciudad de La Plata se vende drogas a los estudiantes. Fuentes policiales informan que el 80 % de los menores que son detenidos por problemas penales consumen drogas, y que el 60 % de esos jóvenes y adolescentes están dentro del sistema educativo. Las autoridades reconocen que el consumo de drogas tiene relación directa con el incremento de la violencia escolar.

El aumento del consumo es incesante, y si bien no hay estadísticas concretas, hay indicadores que marcan este incremento: en el Cenareso (Centro Nacional de Reeducción Social) se reciben más de cien casos nuevos al mes. Podríamos mencionar también como indicador, la cantidad de droga que se incauta en las fronteras, especialmente de Bolivia y Paraguay, que este año ya superó los 398 kilos de cocaína y 3.320 de marihuana. Según informes de Gendarmería Nacional, se secuestra entre el 5 y 10 por ciento de la droga que entra al país y se sabe que cuanto más droga circula, más droga queda fronteras adentro. Otro indicador para tener en cuenta es lo informado por el cuerpo médico forense de la Corte de Justicia, cuando revela que cada 10 días hay un muerto por sobredosis en Capital Federal. Esto se descubre cuando se hace la autopsia ya que cada vez hay más cuerpos con cocaína aunque hayan muerto por otra causa.

Desde 1989 rige la ley 23.737 de tráfico y tenencia de estupefacientes que pena a quien vende y posee drogas, pero esta ley prevé que sea la justicia federal la que intervenga en estos temas. Todas las causas van a estos juzgado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES) de las 23.000 causas que había en estos juzgados en 2001,

12.934 eran por drogas. En la provincia de Buenos Aires, estas variables se disparan, y el crecimiento del consumo trae aparejado un aumento no sólo en los delitos sino también en la violencia empleada en ellos.

Es alarmante el aumento del consumo por las consecuencias sociales que tiene como efecto. El empobrecimiento de los valores espirituales de las personas que son rehenes de las drogas, la alteración de los estados de ánimos, la depresión, la violencia, la desorientación, el abandono de la familia y los afectos, y el efecto tan temido de cruzar la frontera de la ley sin medir las consecuencias. Esto y mucho más podríamos decir en cuanto a los consumidores. Pero también es importante poner el acento en quienes no lo hacen, pero son un eslabón en la cadena de venta y distribución.

En la actualidad, como ya lo expresara anteriormente, está vigente la ley 23.737 que establece en su artículo 34 que los delitos penados por la misma son de competencia de la justicia federal. Es decir, la competencia de la justicia federal en esta materia no es originaria ni está contemplada taxativamente en los enunciados de la ley 48 que establece la competencia originaria de la justicia federal.

La mencionada ley establece que serán de competencia federal las causas que sean especialmente regidas por la Constitución Nacional, los tratados públicos con naciones extranjeras, las causas de civiles en que sean partes un vecino de la provincia en que suscite el pleito y un vecino de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero, sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y el comercio marítimo, contrabando, los crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violación a las leyes nacionales y que ofenden a la soberanía y seguridad de la Nación, los delitos electorales, falsificación de documentos nacionales o moneda nacional, secuestro de personas, y en general todas aquellas causas en que la Nación y en los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción.

En el tema de drogas, la competencia de la justicia federal es asignada por la Ley de Estupefacientes. Entiendo que en estas causas, por la complejidad de delitos que abarca y porque generalmente produce efectos interjurisdiccionales, ya sea entre estados provinciales, o entre la Nación y otros estados nacionales, o por la calidad de los sujetos activos del tipo penal perseguido, no pueden ser sacados de la órbita de la competencia federal, pero creo firmemente que los delitos que se perpetren y que produzcan sus efectos dentro de los límites territoriales de los estados que integran la República Argentina y no sean de competencia originaria de la justicia federal (ley 48 de la Nación) deben ser de competencia de la justicia penal ordinaria de esos

Estados.

Es por ello que la modificación del artículo 34, que aquí se propone, no es para un cambio total de la competencia de la Justicia federal a la justicia penal ordinaria, sino un cambio parcial solamente para los delitos descritos precedentemente, lo que significa ampliar la capacidad de respuesta del estado en la lucha contra el terrible flagelo de las drogas.

Esta ampliación de la competencia traería como consecuencia inmediata que las fuerzas policiales de todo el país, más los juzgados criminales y correccionales, se sumen a la Policía Federal y la justicia federal, en la investigación, persecución, y penalización de los delitos que contempla la ley 23.737.

La avocación de los juzgados federales al conocimiento de las causas que tienen origen en la venta y distribución de drogas, al ser éstos sustancialmente minoritarios respecto de los juzgados penales y correccionales, hace que se torne de cumplimiento imposible la verdadera persecución del delito de la venta minorista de droga, ya que en su mayoría las tareas de inteligencia están dirigidas a operativos de gran envergadura relativos a detectar bandas organizadas de narcotraficantes y redes importantes de distribución.

Para este supuesto consideramos pertinente la competencia federal, ya que generalmente este delito involucra a componentes jurisdiccionales nacionales. Pero en el delito que involucra a los mencionados “kioscos” de venta de droga, que son detectados muchas veces por los vecinos de los barrios donde se establecen y que cada día son más, es muy difícil que pueda llegar a actuar la Justicia federal, porque estos sitios proliferan por todas las jurisdicciones provinciales, y en el caso de estados de gran desarrollo territorial con importantísimos asentamientos urbanos como el Gran Buenos Aires, con distritos con población que supera a muchas provincias argentinas, el combate se hace decididamente imposible. En diversas oportunidades, se solicita que se libren ordenes de allanamiento contra estos puntos de venta, que debido a la gran cantidad que existen, la demora en el libramiento de las mismas hacen que cuando éstas lleguen, ya se haya levantado el punto de venta, debido a que suelen cambiar de lugares.

La preocupación de la gente tiene que ver concretamente con ese tipo de venta, que se instala en los barrios y que contamina la vida cotidiana de los vecinos, involucrando indiscriminadamente a menores, estudiantes de colegios primarios y secundarios y adultos. El fin que trata de perseguir este proyecto es incorporar elementos de lucha contra esos puestos de venta que inciden directamente sobre la vida de la población de la mayoría de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que para la gente representa un peli-

gro más concreto y letal, que la persecución de grandes bandas de narcotraficantes, que en definitiva aparecen en la vida de todos los días como un riesgo más mediato.

Señor presidente, ante innumerables pedidos a los representantes del pueblo por parte de importantes sectores sociales respecto de redoblar el esfuerzo en los temas referidos a la seguridad, este honorable cuerpo debe dar las respuestas que estén a su alcance, mostrando una vez más que se encuentra presente en los grandes temas que preocupan a los ciudadanos. Es por ello que se solicita el pronto tratamiento y sanción de este proyecto de ley.

Mabel H. Müller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora Müller.

Sra. Escudero. – Perdón, señor presidente. Me parece que debo informar el dictamen como presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Hago la consulta.

Sr. Presidente. – La Presidencia no advirtió el pedido de uso de la palabra.

Sra. Escudero. – Señor presidente...

Sr. Agúndez. – Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: como tiene dos artículos que implican una modificación presupuestaria, se acordó en que se constituiría la Cámara en comisión, porque de acuerdo con lo dicho debería intervenir la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ayer, en una reunión de dicha comisión, se acordó utilizar esta metodología, para evitar un giro innecesario, porque el expediente es conocido.

Sr. Presidente. – Se realizará al momento de practicar la votación.

Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: hay acuerdo y además, en su momento, se harán las observaciones correspondientes.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero, miembro informante.

Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero empezar este informe haciendo más las palabras de la gran escritora Marguerite Yourcenar

en sus *Memorias de Adriano*.

Marguerite Yourcenar dice: “El hombre más apasionado por la verdad o al menos por la exactitud es por lo común el más capaz de darse cuenta, como Pilatos, de que la verdad no es pura. De ahí que las afirmaciones más directas vayan mezcladas con dudas, repliegues, rodeos que un espíritu más convencional no tendría”.

Con ese espíritu, señor presidente, quiero informar este dictamen de comisión al que llegamos tal vez no convencidos de que sea lo mejor para el país, pero sí de que es el proyecto del consenso, el proyecto posible en este momento.

Cuando el ex ministro Beliz informó en Casa de Gobierno, con la presencia del señor presidente y de la mayoría de los gobernadores, su megaplan de seguridad, se planteaba la desfederalización de los delitos menores relacionados con estupefacientes. Cuando finalmente el Poder Ejecutivo nacional remite el proyecto a esta Cámara, envía solamente la desfederalización del delito de tenencia simple y tenencia de drogas para consumo personal, junto con la venta irregular de medicamentos y la siembra de estas especies para el consumo personal.

En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo nacional expresa que los delitos tipificados por la ley 23.737 que se vinculan con el tráfico ilícito o tráfico delictivo y que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas enumera en su artículo 3º, superan el límite de lo común y, en cuanto a su juzgamiento, deben ser sometidos a jurisdicción federal. El tráfico de estupefacientes de manera organizada supera las fronteras de los países, corrompe las estructuras de los gobiernos y de la actividad comercial privada a partir de la legitimación de los activos producto del delito. El resto de las figuras típicas que se relacionan con la tenencia de estupefacientes para consumo personal que pudieren lesionar el físico o la moral de los habitantes que importen, en definitiva, un menoscabo del bien jurídico protegido (salud pública), son ajenas al derecho federal y, por lo tanto, deben ser competencia de las jurisdicciones locales.

Es decir que la posición del Poder Ejecutivo nacional fue hacer el corte de desfederalización en la tenencia y la tenencia para consumo personal.

En ese momento, ya estábamos analizando otros dos proyectos: el proyecto de la señora senadora Müller y el proyecto del señor senador Prades.

En su iniciativa, la señora senadora Müller plantea la desfederalización de la venta y distribución perpetradas dentro de la jurisdicción provincial. Es decir, el proyecto de la senadora planteaba que cada provincia entendiera lo que sucediera dentro de su territorio cuando la cuestión no fuera interjurisdiccional. El problema grave que plantea el proyecto tal como está redactado es que no hace referencia a ninguna de las normas o de los delitos que tipifica la ley de estupefacientes y que, prácticamente, el 80 por ciento de la norma se dedica a las cuestiones de tráfico.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Escudero. — Por su parte, el proyecto del señor senador Prades constituye una revisión de otros proyectos presentados en esta Cámara y establece que tanto la justicia federal como la provincial tienen competencia, y que el juez competente será el primero que intervenga.

Analizados los tres proyectos, lo primero que debimos determinar fue la constitucionalidad de la desfederalización. En ese momento, analizamos que solamente la Constitución Nacional establece cuáles son las causas federales y en ninguna parte de la Ley Fundamental se determina que el tráfico de sustancias ilícitas constituya cuestión federal. Por lo tanto, la federalización fue una decisión que el Congreso Nacional adoptó en su momento. En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, no existe obstáculo alguno para proceder a la desfederalización de este tipo de cuestiones.

Con fecha 10 de agosto, las comisiones emitieron dictamen, en función de la propuesta clara y concreta del Poder Ejecutivo nacional, y allí se manifestó la posición fuerte de la provincia de Buenos Aires en el sentido de afirmar que estas iniciativas no eran suficientes para vencer el complejo problema por el que atraviesa esa provincia.

Antes de entrar en detalle en lo planteado por la provincia de Buenos Aires, quisimos ana-

lizar cuáles son las razones por las cuales el Poder Ejecutivo en su mensaje claramente decía que el tema de la lucha contra el narcotráfico debía seguir siendo una cuestión federal. Porque hace referencia, justamente, a los compromisos que la Argentina tiene asumidos en materia de lucha contra el narcotráfico.

En ese sentido, la Argentina no solamente ha adherido a las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, sino que también se encuentra dentro del marco de la regionalización que se plantea en la OEA, en la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas. Existe toda una estrategia a nivel hemisférico que plantea cómo se lucha contra este flagelo. Es decir, reduciendo la demanda. ¿Y cómo se reduce? Previniendo el consumo y rehabilitando a los afectados.

También hay que reducir la oferta. ¿Cómo se hace? Prohibiendo la disponibilidad y sancionando a los responsables. Además, adoptando una serie de medidas de control, como —por supuesto— el decomiso de todos los beneficios que provee esta actividad ilícita, el intercambio de información, la organización legislativa, la modernización de los sistemas judiciales, el control del desvío de precursores químicos y la cooperación de los controles transfronterizos.

Este tema es muy complejo y al respecto existen una enorme corrupción e hipocresía, porque si bien en nuestro país decimos que no se fabrica cocaína, la verdad es que Bolivia no podría fabricarla sin los precursores químicos que produce la Argentina y que exporta a dicho país.

Desde la provincia de Buenos Aires se nos plantea la urgente necesidad de manejar el tema del delito de las drogas, pero ello aparece un poco descolgado por cuanto no aparece dentro de esta estrategia sobre cómo reducir la demanda y la oferta.

Este año se hicieron presentes en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico miembros de la CICAD —Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas— y, como este tema ya estaba en debate, los consultamos acerca de la posición que existe en la OEA. La respuesta fue que la descentralización es considerable en los aspectos de prevención y tratamiento, donde es muy importante que las agencias locales tengan un gran desarrollo, pero

no en el tema del control y la aplicación de las sanciones y la judicialización.

También invitamos a la ministra Roldán Vázquez, quien tiene este tema a disposición, quien nos dijo que la posición de la Cancillería argentina consiste en prestar acuerdo hacia una mayor concentración en el control, pero no hacia la atomización que está planteando el proyecto.

La realidad es que la provincia de Buenos Aires ha seguido insistiendo en su posición y existe un gran debate público. Por lo tanto, tuvimos una reunión con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el planteo concreto que nos formuló es el siguiente: cuando un vecino de un barrio pobre de la ciudad indica el lugar donde se está vendiendo droga, la Policía de la Provincia de Buenos Aires no puede actuar –al igual que las policías de las demás provincias– sin una orden de allanamiento. O sea, la realidad es que todas las policías actúan cuando se está cometiendo el hecho, es decir, cuando existe una situación de flagrancia del delito. En ese caso, la policía actúa; pero para poder realizar un allanamiento, ésta requiere de una orden judicial.

La realidad de que no hay suficientes jueces federales o la falta de proximidad con el lugar del hecho plantean esta necesidad de que sean los jueces provinciales quienes también puedan autorizar las órdenes de allanamiento.

Ante esta situación tan concreta y directa tratamos de hacer un esfuerzo de corte, que no signifique entregar a la desfederalización todo lo que sucediera dentro de la provincia, sino justamente este hecho puntual chiquito que significa el último eslabón de la cadena de comercialización.

En ese momento había llegado ya una de las alternativas de corte, que era cortar en los 300 gramos de cocaína o de otras sustancias y 5 kilos de marihuana. Nosotros hicimos la consulta a la Sedronar y ésta dijo que las cantidades estimadas como límite no constituyen una verdadera propuesta fundamentada científica ni técnicamente, que todas las sustancias no son iguales, que se clasifican en depresores, estimulantes y alucinógenos, variando su dosis de uso y las tolerancias farmacológicas.

Hay un decreto que establece cuáles son los listados de las sustancias prohibidas y en base a

ese listado los científicos asesores de la Sedronar han elaborado una desagregación sobre cuál sería la dosis de consumo y la dosis letal de cada una de esas sustancias.

Entonces, teniendo en cuenta esta base científica y técnica de desagregación por dosis, decidimos elaborar una propuesta que haga este corte en esa pequeña cantidad. Se propone que en los casos de venta, comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis directamente al consumidor, ése sería el tramo último de la cadena que se podría desfederalizar y sujetándolo, por supuesto, a la decisión de cada provincia para que el debate se haga localmente, a medida que la situación sea necesaria. Esas dosis constituirían un elemento objetivo para que en el momento en que se haga el allanamiento se encuentren dosis fraccionadas para su consumo.

En el caso de la marihuana la Sedronar se refiere hasta 50 gramos; en el del clorhidrato de cocaína hasta 5 gramos; en el de la pasta base hasta 10 gramos; para éxtasis, 0,5 gramos; anfetaminas, 3 gramos; ácido lisérgico, 0,15 gramos; sustancias opioides, 1 gramo de morfina.

Es decir, el juez tendrá dos elementos: uno objetivo, que es el fraccionamiento en estas dosis que científicamente la Sedronar nos dice cuánto es cada una de estas fracciones, y un elemento subjetivo, que es que el adquirente sea realmente el consumidor.

En síntesis, éste es el tema más complejo de la decisión y del acuerdo. Pero el dictamen contiene otras novedades que son interesantes. En el primer artículo se incorpora un nuevo tipo penal que recoge la decisión jurisprudencial de distinguir a aquel adicto que entrega a su amigo, facilita droga o lo hace por primera vez, de aquel otro que induce al consumo para después vender. La verdad es que, como estaba planteada la ley, no había proporcionalidad entre ese adicto que entrega ocasionalmente un poco de droga a su amigo y el narcotraficante.

La Cámara de Casación Penal había hecho esta distinción y dijo que la entrega de una pequeña cantidad de marihuana por parte del procesado a un amigo no es suficiente para endosarle la condición de narcotraficante, ya que tamaño salto de imputación rompe la prudente arquitectura legal y deja vacía de sentido la

amplia dosificación punitiva prevista para la tenencia simple. Es decir que recogemos ya en la norma este nuevo tipo penal que fue apoyado por todos los jueces que concurrieron a la comisión a dar su opinión.

En el artículo 2º hacemos un *mix* entre lo que fue el proyecto del Poder Ejecutivo, que no tenía problemas en su debate, que es la desfederalización del delito de tenencia y tenencia para consumo personal; inclusive el tema de la entrega irregular de medicamentos y lo que ya expliqué, el comercio de estupefacientes fraccionados en dosis directamente al consumidor. Es el delito de menor cuantía, ese último eslabón en la cadena de comercialización.

¿Cuáles son los peligros de avanzar en esta norma? Ellos han sido perfectamente planteados por quienes desfilaron por nuestra comisión. El primer peligro —y esto lo sabemos todos— es que deja abierta la posibilidad de abrir un campo de confusión mayor. Cada vez que hablamos de droga sabemos que la droga paga muy bien y se mete en cada resquicio que la legislación le deja. El segundo peligro es que podría provocar un congestionamiento en la justicia provincial. Las justicias provinciales están colapsadas tratando de descubrir autores de secuestros, robos y otros crímenes. En tercer lugar, va a implicar una permanente gestión de conflictos de competencias. Eso fue lo primero que se advirtió por todos los abogados y jueces cuando nos preguntamos cómo se corta, cuál va a ser el juez competente, porque en principio, cuando se realiza un allanamiento o comienza una investigación, realmente no se puede saber con qué se termina al final: si realmente estamos ante una venta chiquita o si detrás de esa venta chiquita aparece una gran mafia o un delito interjurisdiccional. Por eso hemos tratado de incorporarle a la norma algunas reglas procesales simples, recogiendo normas de jurisprudencia para tratar de evitar muchos conflictos. En efecto, el artículo 3º dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, la desfederalización, conocerá la jurisdicción federal cuando la causa tuviera conexidad subjetiva. Es decir, en caso de conexidad prevalece la justicia federal. A su vez, en el artículo 4º se establece que en caso de duda prevalecerá también la justicia federal.

También nos preocupa el tema de los re-

cursos, porque una provincia que va a avanzar hacia la desfederalización de estos delitos menores posiblemente tenga que crear más juzgados, tener más policías y más espacio en las cárceles para los internos. Por eso es que aplicando lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2, último párrafo, toda transferencia de competencias debe ser con la correspondiente transferencia de créditos presupuestarios. Eso es justamente lo que planteamos: que el Poder Ejecutivo nacional tenga que disponer la transferencia proporcional de los recursos presupuestarios en la medida en que las provincias vayan adhiriendo a la desfederalización.

El último artículo es muy sencillo. Por su intermedio se modifica el artículo 39. Sabemos que en el caso de la comisión del delito de narcotráfico, una de las penas accesorias es el decomiso de todos los bienes que se utilizaron para cometer el delito. Por eso planteamos que en aquellas causas que ahora sean provinciales, los bienes decomisados deberán ingresar a cada provincia y ser destinados a la lucha contra el narcotráfico.

La última norma es de tipo procesal y aclara que las causas en trámite continúan en la jurisdicción en la que fueron iniciadas; es decir, esta ley tendrá validez y se aplicará únicamente por los hechos cometidos con posterioridad a su sanción.

Creo que después de todos los meses de debate y de análisis todos coincidimos en el diagnóstico: coincidimos en que especialmente la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesan una situación que se está convirtiendo en un problema nacional. Hemos querido hacer el esfuerzo de dar una herramienta, aunque tenemos nuestras dudas de que ella realmente sirva. En fin, es lo que se está pidiendo y por eso es la herramienta que damos. Creo que el problema es mucho más complejo.

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Latinoamericano se reunió hace dos semanas en Medellín. Estuvimos justamente en los barrios donde desarrollaba su actividad el cartel de Medellín y allí vimos con toda claridad que ahí donde el Estado se retira, ahí donde los jóvenes no van a la escuela, no tienen trabajo, donde no hay contención social, el crimen organizado avanza y va sustituyendo al Estado. Que

no nos pase eso en este país. Hay un problema serio. Me parece que esto sólo no alcanza. Creo que hay que mirar qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes y qué estamos haciendo en inversión social, educación, trabajo y contención.

13

AUTORIZACION A LA PRESIDENCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Antes de otorgarle el uso de la palabra a la señora senadora Müller, la Presidencia pone a consideración del cuerpo la autorización para comunicar al Poder Ejecutivo los acuerdos otorgados hace instantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se harán las comunicaciones de estilo.

14

MODIFICACION A LA LEY 23.737 DE ESTUPEFACIENTES (Continuación)

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra la señora senadora Müller.

Sra. Müller. – Señor presidente: la degradación progresiva que están sufriendo los sistemas culturales de protección social del ser humano, como son la familia, la vecindad, la comunidad, y además la alarmante iniquidad social y la deslegitimación de las instituciones, han sido señalados como los elementos determinantes del avance de la violencia urbana, el abuso del alcohol y el uso de drogas adictivas.

Precisamente en este último tema –en las drogas– es que estamos proponiendo una reforma a la Ley de Estupeficientes (23.737), en procura de hacer más efectiva la tarea de prevención policial por la venta menor y consumo personal de drogas en las distintas jurisdicciones de nuestro país.

Recordemos que como consecuencia de la competencia exclusiva y excluyente de la justicia federal para la investigación de la totalidad de los delitos que contempla dicha ley en su artículo 34, la justicia ordinaria de cada jurisdicción no ha podido actuar, al menos, en la pre-

vención y sanción de la comercialización y consumo menor.

Ello es así dado que la justicia federal rechaza invariablemente los procedimientos provinciales referidos a la investigación y exige a sus fuerzas policiales que actúen tan sólo en las modalidades más graves, como el tráfico mayor e internacional.

Como consecuencia, las fuerzas policiales no controlan hoy la venta minorista en pequeñas cantidades para consumo personal en bares, lugares nocturnos, quioscos, etcétera. Y tampoco lo hacen con relación al consumo por parte de jóvenes y adultos.

Según la experiencia recogida, un elevado porcentaje de delitos violentos son cometidos por jóvenes bajo los efectos de sustancias estupeficientes, lo que coincide con el incremento de la venta y consumo de tales sustancias.

Quiero aportar datos estadísticos de la provincia de Buenos Aires, a la que represento. En el conurbano bonaerense, con una población de 8.200.000 habitantes, el 5,2 por ciento consume drogas; estamos hablando de aproximadamente 365.000 personas. El 55 por ciento de los detenidos en los servicios penitenciarios de la provincia de Buenos Aires ha manifestado haber consumido drogas antes de caer presos. Estos son datos del Ministerio de Justicia. Y cuando hablamos de este 55 por ciento, nos referimos a 10.430 personas.

Dada la causalidad observable y el constante aumento del índice de la criminalidad violenta, resulta necesario hacer efectiva la labor de la policía y de los órganos jurisdiccionales provinciales en la contención, investigación y juzgamiento, al menos, de los delitos de menor entidad, pero cuyo crecimiento está afectando gravemente la vida comunitaria y la tranquilidad de la población de las provincias.

El proyecto propone introducir un nuevo párrafo al artículo 5º; modificar parcialmente el artículo 34 de la ley 23.737 y atribuir a la justicia provincial ordinaria los siguientes delitos previstos y penados en esa ley y en el Código Penal. Ellos son la siembra o cultivo de plantas o valvas de semillas utilizables para producir estupeficientes o materias primas o elementos destinados a su producción o fabricación, cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y de-

más circunstancias surja inequívocamente que ella está destinada para consumo personal; las dos formas de tenencia del artículo 14, la mera tenencia y la escasa cantidad para uso personal; las conductas básicamente referidas a la venta de sustancias medicinales fuera de las prescripciones médicas y demás conductas previstas en los artículos 29 de la ley 23.737 y en los artículos 204, 204 bis, 204 ter, 204 quáter del Código Penal. También las conductas contempladas en el artículo 5º, inciso c), cuando dice “comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte”; las conductas contempladas en el artículo 5º, inciso e), donde dice “entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso o gratuito”.

En el proyecto hemos incorporado un inciso nuevo y es que, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de seis meses a tres años de prisión y si correspondiere serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.

La limitación observada en algunas provincias —como la provincia de Buenos Aires, a la que yo pertenezco— plantea la necesidad de contar con la posibilidad de efectuar procedimientos tendientes a hostigar y desbaratar el comercio menor, dejando en el ámbito federal la comercialización a gran escala y las investigaciones de mayor complejidad. De ahí que se propicia la intervención de la justicia provincial y, específicamente, en los supuestos del artículo 5º, incisos c) y e), cuando se comercien, suministren o faciliten estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Si con motivo del procedimiento de incautación resultaren cantidades superiores a las expuestas reasumirá su competencia la justicia federal.

La modificación del artículo 34 significa un cambio parcial de la competencia de la justicia federal a la justicia penal ordinaria solamente con relación a los delitos descriptos precedentemente y para aquellas provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mediante ley de adhesión opten por asumir sus competencias

con los alcances mencionados, lo que significa ampliar la capacidad de respuesta del Estado en la lucha contra el terrible flagelo de las drogas. Ello traería como consecuencia inmediata que las fuerzas policiales de las provincias que opten por asumir sus competencias más los juzgados criminales y correccionales se sumen a la Policía Federal y a la justicia federal en la investigación, persecución y penalización de los delitos que contempla la ley 23.737, dando cumplimiento de esta manera también a la ley 25.708, Convenio sobre Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Sicotrópicas, y delitos conexos.

Esta propuesta posibilita que cada provincia, de acuerdo con su realidad, pueda optar por el criterio propuesto, dejando en manos de las autoridades locales las atribuciones inherentes al poder de policía de la seguridad, el que luego de la reforma de 1994 quedó expresamente reservado a las jurisdicciones provinciales; específicamente, en el delito que involucra a los mencionados quioscos de venta de droga, que son detectados muchas veces por los propios vecinos de los barrios, donde es muy difícil que pueda llegar a actuar la justicia federal. Estos sitios proliferan por todas las jurisdicciones provinciales y, en el caso de estados de gran desarrollo territorial con importantísimos asentamientos urbanos —como ocurre en nuestro Gran Buenos Aires—, el combate se hace decididamente imposible.

La preocupación de los ciudadanos tiene que ver concretamente con este tipo de venta que se instala en los barrios y que contamina la vida cotidiana de los vecinos, involucrando indiscriminadamente a niños, jóvenes y adultos.

Como autora de uno de los proyectos de ley he recibido adhesiones de sectores sociales, académicos y de representantes del pueblo. En tal sentido, obran en mi poder, entre otras, las declaraciones de respaldo a esta iniciativa de la Federación Argentina de Municipios, del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, de los concejos deliberantes de General Pueyrredón, de Coronel Brandsen, de Presidente Perón, de Adolfo Alsina, de Zárate y de muchos otros distritos.

Tampoco escapa a ustedes que concurrieron

al Senado de la Nación pidiendo que sea aprobado este proyecto el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires; el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, doctor Arslanián y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ingeniero Felipe Solá. Contamos, además, con el apoyo total del ministro del Interior de la Nación, del ministro de Justicia de la Nación y del presidente de la República, que dijo estar totalmente de acuerdo con el proyecto.

También emitieron su opinión favorable a esta iniciativa, entre otros, los siguientes catedráticos especialistas en derecho penal y de renombrada trayectoria: el doctor Julio Maier, el doctor Pedro David, el doctor Carlos Chiara Díaz y el doctor Pedro Bertolino.

Señor presidente: ante diferentes y enérgicos pedidos respecto de redoblar el esfuerzo para hacer más eficientes los sistemas de seguridad, este honorable cuerpo debe dar las respuestas que estén a su alcance, mostrando una vez más que se encuentra presente en los grandes temas que preocupan a los ciudadanos.

Con las modificaciones propuestas, consideramos que habremos dado un paso sustancial a efectos de la utilización de la totalidad de los recursos provinciales para la lucha contra el crimen en esta materia.

No quiero terminar mi exposición sin antes agradecer en forma muy especial al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que en reiteradas ocasiones tuvo que cambiar el dictamen; y, de la misma forma, al resto de los senadores que hoy permiten y hacen posible este proyecto, con una solidaridad que a lo mejor en este momento es necesaria para la provincia de Buenos Aires y para los grandes centros urbanos de otras provincias; pero seguramente en algún momento tendrán que utilizarlo sus propias provincias, Dios quiera que esto no sea necesario.

Pero la solidaridad entre nosotros debe prevalecer siempre.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: ya han hablado la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, uno de los autores del proyecto y ahora lo haré yo, en representación de la Comisión de Asuntos Penales y Regí-

menes Carcelarios.

Pero antes quiero aclarar que cuando la Dirección Comisiones estableció como comisión cabecera a la de Justicia y Asuntos Penales; creo que hubiese correspondido que fuera la de Seguridad Interior y Narcotráfico, pues la iniciativa es de su incumbencia específica. Digo esto porque últimamente suelo encontrar algunos giros mal realizados, pienso que por inobservancia de los temas que tratan los proyectos.

No obstante ello, también hemos dicho muchas veces que respecto de los temas penales es necesario contar con el dictamen con antelación a los efectos de su impresión. Pero este tema hace más de seis meses que lo estamos analizando y la excepción me parece correcta.

De las diversas iniciativas que consideramos, logramos un despacho consensuado que es el que hoy estamos tratando sobre tablas. Al respecto, debo decir que el bloque de la Unión Cívica Radical lo apoyará en la consideración en general, pero en particular plantearemos algunas observaciones debido a que no compartimos la redacción de algunos artículos, a pesar de que fue mejorada en forma total por parte de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Y no es que no estemos de acuerdo, sino que consideramos que no existe una fórmula mágica que pueda dividir la competencia ordinaria de la federal, sin zonas grises. En el caso de existir, hubiéramos aceptado totalmente el proyecto.

Pero planteamos esa disidencia porque respecto de la comercialización –por más que sea a poca escala e identificada por dosis– desgraciadamente sabemos que comienza por lo más pequeño, pero que a medida que se sigue el hilo conductor terminamos en los grandes traficantes de drogas, cuya actividad es de competencia de la justicia federal.

No obstante ello, buscamos un reaseguro dentro de los seis artículos propuestos para evitar la menor cantidad de problemas que se puedan concitar en relación a las competencias.

Pero también es digno decirles a las policías provincial y federal y a las justicias provincial y federal que tienen que actuar con mesura y responsabilidad. Y respecto de esto no hago un

deporte de la discusión de las competencias, porque todos los esfuerzos que hace el Congreso de la Nación –en este caso el Senado nacional–, pueden llegar a verse perjudicados por las decisiones que se tomen al respecto.

Es cierto, como decía la senadora Müller, que hay mucha gente que está de acuerdo con este proyecto. Pero las estadísticas son alarmantes, ya que la justicia bonaerense cuenta con aproximadamente 450 fiscales –contra los 45 de la federal–, y los jueces federales son 38, contra los 450 provinciales. Y si vemos que hay una policía bonaerense con 45 mil efectivos, en contraposición con los 2 mil federales, es evidente que la policía y la justicia federales no tienen posibilidad de estar todos los días en las calles trabajando sobre este tema que es el flagelo de la droga en la República Argentina.

Pero debemos decir a la policía, que en este momento en la aplicación de la misión y control de la droga posee 400 efectivos, que si se le otorga esta posibilidad, su Departamento de Toxicomanía debería trabajar juntamente con las policías locales. También es verdad que hubo oposición a los proyectos que se consideraban.

El primer proyecto era del señor senador Menem, que no fue incorporado ahora porque había caducado y su autor no lo presentó nuevamente.

Otro proyecto correspondía al señor senador Prades y en él se planteaba una concurrencia de competencia, pero evidentemente eso llevaría a una carrera para ver quién llegaba primero a descubrir el delito.

La comisión que asesoraba al presidente Kirchner en este tema había remitido un anteproyecto y el propio presidente remitió uno sobre desfederalización de la droga.

Respecto de esa iniciativa, la comisión emitió un dictamen en el que no se preveía como posible la desfederalización de lo atinente al menudeo de la droga.

Vale aclarar que en la propia exposición de motivos, el Poder Ejecutivo escinde qué causas relacionadas con la droga pasan a la justicia provincial y cuáles quedan en la competencia federal.

A partir de ese momento, se confeccionó una serie de proyectos y su tratamiento se fue dilatando hasta que la provincia de Buenos Aires,

representada por el gobernador Solá y por los intendentes del conurbano –que representan a 13 millones de habitantes del país–, solicitó que se actuara a fin de no convertirse en cómplice de este gran flagelo que es la droga; algo que fue bien reflejado por los diarios nacionales y provinciales.

Entonces, se continuó trabajando y así fue como surgió un anteproyecto en el que no sólo había acuerdo respecto de muchas modificaciones introducidas al proyecto del Poder Ejecutivo sino que, además, se planteaba que en lugar de hacer el corte entre una competencia y otra por tipología de delito, se hiciera por peso y sustancia, a fin de ser más claros y evitar las zonas grises.

A mí me pareció que esa metodología de corte en la tipología no era apropiada, máxime cuando se aludía a 300 gramos de cocaína –300 dosis– y 5 kilos de marihuana, lo cual era excesivo, porque si se toma individualmente a cada uno de los integrantes de una familia numerosa, evidentemente, se estaría ante grandes traficantes de droga.

Por eso, quedamos en darle un cierto contenido al artículo 5° –el que alude al comercio–, y así fue como la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico vio la posibilidad de que la competencia fuera provincial en caso de que se tratara de dosis para consumo.

Creemos que esto no va a solucionar el problema, más allá de que es lo más aproximado a la realidad, porque hay una imposibilidad fáctica en la división de las competencias.

Es por estas razones que esta modificación no será acompañada por el bloque de la Unión Cívica Radical, precisamente, porque habrá un problema de competencia, aunque se incluyeron las normas de prelación –en caso de duda, la competencia será federal– y una gran participación a la provincia a través de lo que se llama el federalismo de concertación, que está muy actualizado en doctrina pero muy poco utilizado en los diversos tratamientos de las iniciativas analizadas en el Senado de la Nación. Precisamente el inciso 30 del artículo 75 de la Constitución Nacional se refiere a esta suerte de federalismo de concertación, con la policía de seguridad en manos de las provincias. Por esta razón establecemos en la norma la adhesión de las Legislaturas provinciales para que exis-

ta igualdad ante la ley por parte de todas las provincias argentinas.

Me parece bien que así sea y que el Senado de la Nación —a través de cada uno de sus representantes— y las Legislaturas provinciales nos involucremos en esta cuestión y asumamos nuestra responsabilidad en uno de los temas más importantes que hacen a la seguridad del país.

En efecto, según las estadísticas, el 60 por ciento de las personas que cometen delitos violentos en nuestro país lo hacen bajo los efectos de las drogas.

Debo reconocer también, señor presidente, la importancia de las normas de prelación, de adhesión y de la que determina la previsión —aplicando el artículo 75, inciso 2, de la Constitución— de las partidas respectivas, dado que las provincias deberán cubrir ahora un servicio que estaba en la cabeza de la Nación. Seguramente el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se va a explayar al respecto.

Pero debemos contemplar otras cuestiones porque, de lo contrario, señor presidente, puede existir una suerte de “competencia desleal” entre las distintas policías. En efecto, se ha hablado de muchísimas cosas y cada uno de los señores senadores habrá escuchado hablar de “cajas”, como se dice en la calle. Se trata de afirmaciones que se hacen con gran irresponsabilidad, y debemos decirlo con nombre y apellido. Esto está sucediendo con motivo de la consideración o del tratamiento de esta iniciativa.

Creo en la buena fe de los funcionarios hasta que se me demuestre lo contrario, y creo en la integridad moral del gobernador Solá y del ministro Arslanián. Creo que el presidente de la Nación, al mandar hace pocos días al señor ministro del Interior, está avalando esta iniciativa, aunque nosotros no la compartamos por razones de método.

Pero también debemos decir que así como nunca nos ha gustado hacer defensas corporativas —en el caso de la clase política— tampoco nos gustan las acusaciones de carácter colectivo según las cuales pareciera que los delitos fueran objetivos y ajenos a la conducta de cada persona. Creo que la cuestión debería ser monitoreada y sometida al control parlamentario a

fin de que estos instrumentos resulten eficientes y firmes en la lucha contra la droga y no terminen siendo el negocio de algún policía.

Creo que si contamos con esa prelación debemos contar también con convenios de coordinación de las investigaciones, porque de lo contrario parece que cada investigación que realiza un ente de inteligencia del Estado le fuera propia; la Policía Federal no le da información a las policías provinciales, y éstas no la comparten entre sí. Pareciera que esta cuestión estuviese acotada a una sola situación. Entonces, debemos establecer convenios y revisar un instituto como el criterio de oportunidad, que recientemente hemos considerado en esta Cámara. Se debe apelar a este instituto en relación a aquellos que consumen drogas, dado que incluso se han redactado proyectos para la despenalización del consumo, puesto que se sostiene que el consumidor no es un delincuente sino un enfermo. Entonces, mientras tanto, considero que los criterios de oportunidad en manos de los fiscales podrían resultar un adelanto importante en la provincia de Buenos Aires.

Todo esto depende mucho de la buena fe, del control y de la integridad moral de cada uno de los policías que deben actuar en estas cuestiones.

También se me decía si no es difícil dar esta posibilidad a las policías provinciales que normalmente dependen de los poderes políticos. Y éste es uno de los delitos más fáciles de imputar por la imposición de pruebas. Pero si permanentemente vamos a dudar de todo, evidentemente estamos en una Argentina desquiciada. Yo apuesto a una Argentina que debe recuperarse inmediatamente y, si trabajamos en este sentido, vamos a llegar a conocer cosas importantes.

Por último, señor presidente, así como se ha dicho que han existido pensamientos clave en este sentido, a favor de esto que estamos haciendo, también es cierto que se han dado situaciones en contra de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué vamos a ocultarlo?

Hace poco se publicó, en una revista del Parlamento argentino, que “la justicia a la vuelta de la esquina” es una buena propuesta que ya se ha aprobado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. El Senado aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo para descentralizar la Justi-

cia, de modo que los fiscales estén más cerca de donde se comete el delito. Me parece que esto es bueno. Y, por los lugares donde se irían creando las fiscalías, el proyecto determina que los departamentos judiciales de La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mercedes, Morón, Quilmes, San Isidro, San Martín, Zárate y Campana tendrían fiscalías y defensorías descentralizadas, que es lo que se establecía inicialmente en el proyecto para la Capital Federal durante la gestión del ministro Beliz.

Pero este proyecto también es importante porque, además de descentralizar la Justicia pues la tiene más cerca del delito, en las zonas más calientes del conurbano, ésta podrá controlar a la policía del interior de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que esa provincia es más grande que muchas provincias argentinas chicas, donde el control es más fácil. Este acercamiento de la Justicia a la gente es lo que se denomina posibilidad de ocupación que tiene la policía de la provincia.

En ese sentido, la diputada Filomena D'Amrosio consideró que el mal estado de la Justicia provincial hace inadmisibles que se ocupe de casos de droga. Habla del tráfico de droga de menor cuantía y dice que actualmente la Justicia provincial está sobresaturada. Ella pregunta: "¿Qué será más eficaz y trascendente, que la Justicia bonaerense tenga facultades sobre las causas emparentadas con la droga o que el Estado fortalezca su rol y genere una política clara y comprometida con la realidad en la que estamos inmersos cada vez más como sociedad?"

Creo que, también en una muy buena actuación, esta diputada ha visto cuáles son las cosas malas y las cosas buenas que tiene la provincia de Buenos Aires. Y lo que me llama la atención en la nota es que, evidentemente, hay una importante reducción en la asignación presupuestaria y, por ende, la imposibilidad de continuar abordando la temática de la forma en que lo necesitan todos los problemas de la subsecretaría encargada de la atención a las adicciones.

No quiero encontrarme, señor presidente, con mensajes cruzados o discursos totalmente cambiados. Creo que hay que tratar una problemática general y trabajar no solamente poniendo el acento en buscar a los drogadictos, pero no encontrando nunca a los traficantes. Me parece

que hay que darle mucha protección a esta subsecretaría. Y esto se logra precisamente dándole partidas presupuestarias para hacer las curaciones y prevenciones necesarias; si no, vamos a tener una Argentina muy difícil, mañana, señor presidente.

También tengo que decir que Felipe Solá y Aníbal Fernández piden, juntos, una ley al Senado. Ustedes saben que la están pidiendo en base a este proyecto que se ha hecho acá.

También habrá intendentes que reclamen a los senadores porque dicen que no se puede seguir así en la provincia de Buenos Aires.

Hemos aceptado todo eso. Hemos recogido el clamor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que nos dijo –como también lo dijo a varios medios– que protegemos de la droga a los europeos y no a los pibes que viven en el conurbano. Esto habla de que la droga incluso conviene más que un plan social, porque están ganando 1.000 pesos mensuales con la venta de droga. Pero también tenemos que reconocer que un camarista de La Plata, de muy buen conocimiento de la materia, Schiffrin, dice que, en vez de desfederalizar la droga, tenemos que federalizar más y combatir el narcotráfico. Da un claro ejemplo de que, en la medida en que avancemos más en el perfeccionamiento de la Policía Federal y de la justicia federal, evidentemente no hará falta que participe la provincia en esto.

No obstante, hemos hecho el esfuerzo, como dijimos, señor presidente. La Unión Cívica Radical cree –y siempre va a creer– que el tema de la inseguridad nos envuelve y nos responsabiliza a todos.

Hemos acompañado este proyecto, pero el inciso 1) no lo vamos a apoyar, porque consideramos que no ayudará, no obstante de que es lo mejor que se encontró. La fórmula mágica no apareció, pero quedó eso. Seguramente, con la mayoría del oficialismo, este proyecto de ley se va a sancionar, pero vamos a tener que controlar y monitorear todo lo necesario.

Queremos que este proyecto de ley sirva para mejorar la situación de seguridad, sobre todo, en el conurbano bonaerense, pero no para que tenga caja la policía bonaerense, si es que fuera cierto lo que se ha dicho.

En definitiva, queremos colaborar; estamos

y vamos a estar atentos y vamos a acompañar en general el articulado del texto propuesto, aunque no en lo relativo al comercio de la droga, por más que sea minoritario, porque es imposible la división entre el corte de la Justicia provincial y federal.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. – Señor presidente: pido que por Secretaría se lea la lista de oradores, luego de lo cual hago moción concreta de que se proceda a su cierre.

Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Estrada). – Se encuentran anotados los señores senadores Giustiniani, Conti, Prades, Cafiero, Yoma, López Arias, Capitanich, Leguizamón y Pichetto.

Sr. Presidente (Guinle). – Se están agregando el señor senador Rossi y las señoras senadoras Caparrós e Ibarra.

Si no existen más observaciones y ningún otro senador se anota, corresponde considerar el cierre de la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en consecuencia.

Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos considerando en esta modificación a la ley 23.737 la desfederalización de algunos delitos.

Este tema abrió tremendos interrogantes desde el inicio de su tratamiento, a pesar de la solvencia expuesta por los miembros informantes, del tratamiento en la comisión respectiva y de las modificaciones realizadas. Pero todo ello no alcanza para disipar las dudas que genera la respuesta al grave problema de la droga en la República Argentina.

Además, quiero aclarar que no todos hemos tenido el gusto de escuchar al ministro Arslanian. Realmente, nos hubiera resultado interesante escucharlo y poder tener un debate cara a cara con él, porque sentimos respeto por su trayectoria y por la acción que está desarrollando frente a un tema tan complejo como el delito en el conurbano bonaerense.

Estamos considerando la modificación de una

ley de la Nación y no estamos considerando aspectos particulares que podemos tener en algunas determinadas provincias. En mi caso, vengo de una ciudad de 1.300.000 habitantes como Rosario, donde en distintos barrios de la ciudad nos enfrentamos a este grave problema de la droga en la juventud.

Creo que aquí no queda claro lo que estamos discutiendo. O sea, si estamos dando una respuesta al problema del delito en concreto, si queremos dar esa respuesta o si queremos dar una respuesta al problema de la droga.

Como han dicho los senadores y las senadoras preopinantes, existe una vinculación en la metodología del delito con la cuestión de la droga, porque con ésta el delito se ha vuelto mucho más violento y dramático. La situación se da en cada uno de los barrios o en la salida de las escuelas y de los colegios, cada vez con personas de menor edad, donde llega esa droga que rompe el desarrollo de la juventud.

No tenemos que ir a leer el libro *Noticia de un secuestro*, de Gabriel García Márquez, para ver el dramático fin de un joven sicario drogado que ya no tiene nada que perder y hace de la metodología del secuestro la posibilidad de seguir subsistiendo y consumiendo droga. Y cuando vemos la espiral del delito en la Argentina, damos este debate porque es complejo. Y así como cuando hablamos del delito dijimos que no es solución estar toqueteando el Código Penal, ésta no es la solución de fondo para dar la respuesta eficaz a esa espiral de delito que continúa en la República Argentina. Hoy venimos a decir que no vamos a acompañar estas modificaciones a la Ley de Estupefacientes, porque no es una respuesta eficaz y correcta, y se sigue balconando el problema de fondo. Y el problema de fondo, desde mi punto de vista, sigue siendo las conexiones mafiosas de sectores policiales con delincuentes en los secuestros extorsivos, el negocio de la droga o el de la prostitución.

Desde nuestro punto de vista, tenemos una respuesta para que no se vaya al fondo del problema. Desde una cuestión que no es el eje central, no solamente se evade momentáneamente la respuesta de fondo del problema, sino que además se toma un camino equivocado. Este es un ejemplo. El problema de la droga es federal, porque no hay que ir a la Constitución Na-

cional; en su complejidad, arranca en las fronteras. Tenemos los informes permanentes de Gendarmería Nacional; están las pistas clandestinas. A partir de ahí, se introduce todo en el territorio nacional. Es una cuestión de sentido común que la respuesta al combate a las drogas no se puede dar desde cada provincia individualmente.

Es un problema de sentido común entender que la respuesta al problema de la droga y al del narcotráfico, fundamentalmente, se debe dar desde una estrategia nacional. Y es así en todos los lugares del mundo. La respuesta moderna que se da al problema de la droga es a través de la unificación de concentración del control y hacia autoridades unificadas, porque el narcotráfico por definición es un delito móvil y con raíces múltiples. No desaparece nunca en la medida en que mueve 500 mil millones de dólares anuales. Hoy, el tráfico de drogas, el de personas y el de armas constituyen los tres delitos más deleznablemente rentables en estos tiempos de la globalización. Por lo tanto, se trata de dar una respuesta eficaz a ese problema del narcotráfico.

En general, en la tendencia internacional, encontramos que la misma autoridad en materia de aplicación de drogas tiene la supervisión del organismo de seguridad, la posibilidad de controlar la lucha con el narcotráfico en toda su dimensión y, además, la estrategia de prevención y los trabajos de prevención a todo nivel. Por eso, en distintas oportunidades, la misma Cancillería argentina ha manifestado esta cuestión, que la respuesta de fondo se da de esa manera.

Por eso, cuando vemos los estudios y los datos que se ofrecen, como el del Ministerio de Justicia, nos llaman a la reflexión: se observa que el problema central que se sigue atacando es el del consumo, el problema minoritario, y no se ataca el problema del narcotráfico.

Según el Ministerio de Justicia, a partir del relevamiento de las causas ingresadas en los juzgados en lo criminal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el primer semestre de 1996, el 70 por ciento del total de causas relevadas correspondía a tenencia para consumo personal; el 23,9 por ciento, a tenencia simple, y las causas por consumo para comercialización representaban sólo el 4,7 por ciento

del total de los imputados. En el mismo estudio, señor presidente, se informa que la cantidad de drogas secuestradas se concentra en el intervalo de cantidad menor a cinco gramos que es el 87 por ciento de los casos, y en las categorías que superan los diez gramos sólo se encuentra el 7,6 por ciento de los casos.

Con estos datos incontrastables nos estamos dando cuenta de que los narcotraficantes siguen vivitos y coleando y que no se ataca el verdadero problema en su causa, en su generación. Por otra parte, nosotros vemos contradictorio y no compartimos el concepto de que el último eslabón de una cadena sea el que consume, a quien nosotros consideramos un afectado. En efecto, nosotros consideramos afectado a ese joven que está en el colegio o que se encuentra desocupado en una esquina de algún barrio y al que se le pone la droga por un peso al alcance de su mano.

Pero además, siguiendo el razonamiento de la cadena, no entendemos cómo la respuesta eficaz que se busca para el problema es rompiendo la cadena, diversificando, dividiendo en dos: por un lado la Justicia nacional y por otro la Justicia provincial. Claro que conocemos el problema del kiosco de la esquina. Lo conocemos en nuestras ciudades. Lo padecemos en nuestras ciudades. Pero creemos que hoy ya existe una coordinación entre la policía federal y las policías provinciales. Hoy existe una estrategia al respecto.

Entonces, a esta modificación de la Ley de Estupefacientes la entendemos más como otra respuesta espasmódica a alguna coyuntura provocada por algún hecho puntual que como una respuesta necesaria y de fondo para solucionar el problema de la droga.

Por otra parte, nos preocupa lo otro, que fue también manifestado por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. La jueza Larrandart dijo: “Yo tengo miedo de que se cobre peaje para ver si interviene el juez local o el juez federal”. Hay una clara situación de dudas. ¿Esto da lugar a un mecanismo de mayor transparencia o de menor transparencia en el manejo de una cuestión tan delicada como ésta? No compartimos el hecho de que en este momento se tenga que hacer este desdoblamiento, porque si bien está desbordada la justicia federal, también lo están las Justicias provinciales.

Creo que debiéramos analizar el fondo de esta

cuestión. Se han manifestado muchísimas dudas a lo largo del tratamiento de este proyecto. En el diagnóstico de la Justicia provincial, se ha dicho que la justicia correccional no pudo absorber otras causas y que si se agrandan sus atribuciones, colapsaría; por lo tanto, me parece que estamos equivocando el camino. Creo que este flagelo de la droga debe ser combatido allí donde aparece, en las causas, en el narcotráfico, que sigue estando sin respuesta desde los organismos del Estado. Creo que es un camino equivocado que va a traer muchos más problemas que la solución que se intenta dar en este momento.

Por eso, vuelvo al principio. Creo que es cortando las conexiones mafiosas entre los sectores policiales, los delincuentes, los secuestros extorsivos y el negocio de la droga y la prostitución como empezaremos a desandar el camino para que esta espiral de violencia disminuya en la República Argentina.

Sra. Müller. – Señor presidente: solicito la palabra para formular una aclaración respecto de lo que dijo el señor legislador.

Sr. Presidente (Guinle). – Para una aclaración tiene la palabra la señora senadora Müller.

Sra. Müller. – Señor presidente: el señor legislador dice que quien consume drogas es un enfermo y yo coincido absolutamente con él. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es si quien le vende la droga no es también un enfermo.

En segundo lugar, hablamos con la desconfianza que puede traer aprobar una iniciativa de esta naturaleza debido a los actos de corrupción de las fuerzas policiales –en este caso, la nuestra, la bonaerense–, que en algunos casos han tomado estado público. Pero yo creo que cuando este Congreso legisla, lo hace creyendo en las instituciones, y en ellas –particularmente, la Justicia– hay gente muy buena y profesionalmente muy capacitada y preparada. Por lo tanto, no debemos guiarnos por algunos casos individuales de corrupción.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra la señora senadora Conti.

Sra. Conti. – Señor presidente: como he firmado en disidencia el dictamen que ahora está en tratamiento, me veo obligada a fundar mi voto.

Admito que comparto las apreciaciones del señor senador Giustiniani y las dudas expresadas por la señora senadora Escudero. Por lo tanto, no acompañaré este proyecto con el ahínco con que lo hace la señora senadora Müller.

No obstante ello, adelanto mi voto afirmativo al dictamen tal como está elaborado –es decir que posibilitaré que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires adhiera a esta norma y tome para sí la competencia de sus jueces locales en el menudeo de la droga–, dado que el ministro de Justicia de mi provincia es el doctor Arslanian y la procuradora de mi provincia es la doctora Falbo, quienes tienen una formación académica e idoneidad insoslayables para manejar al cuerpo de fiscales y a la policía de Buenos Aires.

En efecto, recordemos la decapitación que realizó últimamente el doctor Arslanian en la policía departamental de San Isidro, que era un foco que todavía estaba dando que hablar dentro de la policía bonaerense, porque se la asociaba al narcotráfico y a los secuestros.

Por lo tanto, se trata de dos personas puestas por el gobierno y la Legislatura de mi provincia, que me dan la pauta de que se quiere tomar al toro por las astas y romper con la ya tan mentada y real connivencia entre políticos, policías, droga y delito.

Así y todo, entiendo que esta norma debería haber sido acompañada por la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, porque como la depuración de una fuerza y la ruptura de las mafias y la connivencia política, policial y delictual que hay en mi provincia serán una lucha larga, que debe hacerse con ahínco y cuyos resultados los veremos a través del tiempo, mi preocupación es que al adquirir la competencia en materia de estupefacientes, incluso en el menudeo, la eficacia de esta reforma legal quiera mostrarse apresando a los adictos, que para mí son enfermos, que no son delincuentes y que hoy así lo son sólo porque la ley 23.737 violenta la Constitución Nacional al penalizar la tenencia de droga para consumo personal.

Entonces, con estas aclaraciones, fundando mi disidencia y no poniendo a consideración la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, porque creo que éste es un

tema que hoy este Senado no aprobaría, pero que con un debate profundo y sin hipocresía vamos a tener que abordar, como también lo tendremos que hacer si es verdad que queremos que no sea el narcotráfico el que penetre y perfore no sólo al conurbano, sino también nuestra cotidianidad, nuestras vidas y nuestra seguridad. ¿No será hora de empezar a analizar si no habría que legalizar la droga? Creo que estos debates también vamos a tener que darlos en la Argentina.

Por ello, con esta disidencia, fundo mi voto en favor de la pretensión de la provincia a la que pertenezco, la provincia de Buenos Aires.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Prades.

Sr. Prades. – Señor presidente: éste es un tema muy opinable, que no tiene como base esencial y fundamental la persecución de la víctima, sino del victimario.

Esta Argentina, que es tan grande, ofrece facetas tan diferentes en el norte, en el sur, en el centro y en la Pampa Húmeda, que también se exteriorizan en este tema en particular. El problema de la Ley de Estupefacientes tiene que ver con un flagelo que corroe a la sociedad global y acerca del que los argentinos señalábamos hace un tiempo que nosotros no teníamos inconvenientes porque éste era un país de tránsito. Así, estábamos tranquilos y les dábamos tranquilidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero hoy, nos damos cuenta de que no es así y que la droga está en cada lugar, en cada rincón de la geografía del país, que enferma y que, en muchos casos, mata. A muchos les da miedo hablar de este tema y a otros no les interesa hablar sobre esto porque, precisamente, es peligroso.

Ahora bien, los que hemos asumido los riesgos de esta noble profesión, más allá de las críticas que se nos formulan –muchas veces con razón y otras, sin ella– debemos afrontar este peligro, porque la instalación de la droga está prácticamente destruyendo a la familia argentina y al tejido social en toda la extensión territorial del país.

Hace un tiempo, yo presenté un proyecto porque estas características diferenciales de la Argentina, que se notan también en esta cuestión, generan un cúmulo de transgresiones, de violaciones y de alteraciones de principios esenciales de los derechos constitucional y procesal argentinos: los derechos del debido proceso y

de defensa y los principios del juez natural, de celeridad y de inmediatz.

Los problemas del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires en particular son muy exteriorizados y patentizados por los medios de prensa o de comunicación nacionales, porque es cierto que prácticamente ahí radica un porcentaje importante de la población nacional. Pero hay lugares de esta Argentina en los que un juez federal se encuentra a 400 o 500 kilómetros del sitio donde se comete el hecho delictivo. Entonces, allí se desnaturalizan los principios de inmediatz y de celeridad y, además, se presenta el problema de que la justicia y las policías provinciales se declaran incompetentes. Así, los vecinos y las vecinas de los pueblos de las distintas provincias a quienes aflige este problema observan que las cosas no se solucionan y que no existen prevención ni represión, porque la justicia y las policías provinciales son incompetentes. Entonces, empiezan las sospechas, las suspicacias, las conjeturas y las hipótesis respecto de este problema grave que tiene prácticamente toda la Argentina.

Cuando yo presenté el proyecto –era otro momento que el que se presenta hoy en la Argentina–, había establecido la posibilidad de que la competencia la tuviera la jurisdicción donde en primera instancia el juez hubiera prevenido. Obligaba a este juez preventor a dictar un auto fundado a los efectos de determinar su competencia y su dirección. A su vez, facultaba al fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas de dictado este auto, a apelar si consideraba que la competencia no era procedente. Ese proyecto no ha tenido andamiaje parlamentario. Se ha logrado un proyecto consensuado –algunos de cuyos aspectos no comparto–, pero creo que es necesario dar una respuesta a esta problemática grave que tiene en particular la provincia de Buenos Aires, y muy especialmente el conurbano bonaerense.

Bien señalaba la colega por Salta, senadora Escudero, que las leyes en general tienen resquicios. Seguramente, esta norma no bastará para abarcar todo el espectro que esta materia requiere. Entonces, habrá que estar con los ojos muy abiertos viendo cómo rápidamente, y a medida que los hechos se vayan produciendo, debemos ir adecuando la norma activa a todos estos acontecimientos que el devenir histórico

seguramente nos va a ir presentando.

Pero esta norma tiene algunos aspectos positivos que yo debo reconocer y señalar como, por ejemplo, que en los casos de conexidad subjetiva la competencia es federal. Esta es una determinación del principio de ordinariedad que hoy tiene la justicia federal; y la excepción la van a tener las justicias provinciales. Otro elemento positivo es, precisamente, el *in dubio pro federal*. Esto quiere decir que, en caso de duda, la competencia se determina para la justicia federal. Esto demuestra y exterioriza claramente que estamos determinando que, por principio, la justicia federal es la competente y, por excepción, lo es la provincial.

Además, hay un hecho importante en la norma, que no avasalla las autonomías provinciales, que determina la posibilidad de que cada una de las provincias argentinas opte por su adhesión y que, en definitiva, la ley también las comprenda.

Hay un tema que no quiero dejar de lado y que ya se señalará en particular. De hecho, lo hará precisamente el senador Agúndez, presidente de la comisión, y a quien le hemos encomendado la aclaración de nuestra posición como bloque. Me refiero al artículo 5º, sobre cuyo tratamiento en particular nos detendremos.

Quiero terminar diciendo que creo que con esta ley no se termina nada; que con esta ley no se va a abarcar en forma integral esta problemática; pero puede ser el punto de partida de un camino nuevo en la persecución definitiva no del enfermo sino de quien enferma al enfermo. Ese es, precisamente, el objetivo que debemos buscar entre todos los argentinos como una política de Estado de seguridad, que fundamentalmente achaque y machaque de manera fuerte sobre los que negocian; sobre los que hacen un mercantilismo perverso y desgraciado que enferma no sólo a quienes pueden comprar sino sobre todo, como bien lo señaló la senadora por Salta, a los más pobres, a los marginados y a los excluidos de la Argentina de hoy.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Cafiero.

Sr. Cafiero. – Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer en nombre del pueblo y del gobierno de la provincia de Buenos Aires –en particular, de quienes tienen a su

cargo la complejísima tarea de gobernar el conurbano bonaerense– por la rápida recepción que se ha dado a un proyecto presentado desde la provincia de Buenos Aires, el que después de haber experimentado modificaciones muy lógicas y sabias, hoy se prestará a votación por parte de este cuerpo.

Ninguno de los que estamos en este recinto ignora que se trata de uno de los temas más sensibles de la realidad, no sólo nacional sino también mundial.

El tráfico y consumo de drogas –lo manifestó muy bien un colega que me precedió en el uso de la palabra–, junto con el tráfico de armas, actualmente constituye el negocio medular de la delincuencia internacional.

Se manejan millones de dólares. Quinientos mil millones de dólares –creo que ésa fue la cifra que escuché de boca del senador Giustiniani– es el capital que gira alrededor de este tipo de negocios, que muestra el lado negativo de la globalización. Esto también es globalización, ya que estos delitos no tienen entidad nacional. Estos delitos son internacionales por definición, se nutren de alianzas con grupos económicos y financieros –e incluso con organizaciones terroristas–, y dan origen al lavado de dinero, que es una actividad extremadamente provechosa y que actúa en función de las necesidades y beneficios de quienes se dedican a este tipo de actividades.

Existe una verdadera corporación internacional del crimen organizado, que hasta el momento no ha logrado ser desarticulada por los poderes internacionales. Es cierto que se aprobó en 1990 –en la Asamblea de las Naciones Unidas– un programa de acción contra la droga, y que se declaró al 26 de junio como Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Pero éstas son declaraciones teóricas. No se generó en el orden mundial una tesitura de poder que permita atacar el lado internacional del comercio ilícito de estupefacientes.

Los argentinos nos acostumbramos a creer aquello de que “la Argentina es un país de tránsito”, o de “no somos un mercado de consumo ni somos un país productor”. Entonces, el control se ejercitaba en la frontera. Lo único que se vigilaba con algún grado de efectividad era el tráfico exportable, y descuidábamos los eslabo-

nes internos de este proceso ilícito.

Pero ahora nos hemos dado cuenta de que esto ya no es más así. En consecuencia, debemos cambiar la óptica con que se ven los fenómenos de la drogadicción y del comercio ilícito de drogas. Ya no los podemos mirar con el telescopio –a la distancia–, sino que ahora debemos observar con el microscopio los hechos que dan lugar a esta cadena delictiva.

Me alarmé mucho cuando escuché al ex ministro Beliz decir que la Argentina iba en camino a una narcodemocracia. Esto es lo que le escuchamos decir a un ministro de la Nación. No sé si una frase así podrá tener una ligazón severa con la realidad, pero es una voz de advertencia.

Señor presidente: la conclusión a que se llega es que cuando se expropia o se incauta un cargamento de drogas ilícitas en la frontera, no estamos salvando a los niños argentinos, sino a los españoles, norteamericanos u holandeses, que habrían sido los eventuales usuarios de este tipo de sustancias psicotrópicas.

Por eso, la clave para atacar de una forma efectiva el problema y el negocio de la droga es controlar y reducir la oferta. Si no hay disponibilidad de droga en cantidad y precio aceptables, la droga se vuelve virtualmente un artículo de lujo y deja de ser lo que es hoy, un artículo de consumo, inclusive para los pobres.

Bien se dijo acá –no sé si fue la señora senadora Müller– que hoy está comprobado que una señora que esconde en los pliegues de su pollera un cargamento –llamémoslo así– de droga y la vende gana mucho más que como beneficiaria de un plan Jefas y Jefes de Hogar. Esto se está convirtiendo en un negocio cotidiano, sobre todo, en los grandes conglomerados urbanos como es el de la provincia de Buenos Aires.

Entonces, frente a este fenómeno, confieso mi sorpresa porque hay una terminología que me resulta absolutamente novedosa y nueva.

No sabía, por ejemplo, que inhalando goma de pegar, aerosoles, pacos, pastas derivadas de los desechos de los tubos fluorescentes y líquido de encendedores y disolventes de pintura se consiguen resultados de primera calidad para el consumidor de droga. Parece increíble, pero está probado que este consumo causa graves daños al cerebro de las personas usuarias, parálisis y

posibilidad de muerte.

Esta es la realidad que nos describen quienes tienen a su cargo el control de este tipo de actividades.

Señor presidente: repito la frase de mi gobernador, que comparto: “El Estado está adormecido o narcotizado cuando se trata de generar una genuina política de drogas en la Argentina y la falta de acción crea una situación que hace que el conurbano esté perforado por la droga y los pobres se están haciendo traficantes”.

Se habló en el recinto –no voy a repetir cifras dadas por otros señores senadores– sobre la relación que existe entre el consumo de drogas y la cantidad de actos de violencia, delictivos o no.

En una encuesta sobre 10.400 detenidos en la provincia de Buenos Aires, el 55 por ciento es consumidor de droga y el 42 por ciento actuó bajo el efecto de alguna droga cuando cometió el delito por el cual está preso.

Para terminar, señor presidente, ¿por qué digo que todavía no hay una política de drogas suficientemente explícita que, digámoslo así, contribuya o complementa la legislación que intentará ser sancionada en el día de la fecha? Hay escasos recursos para la Sedronar, que es el organismo específico del Estado encargado de actuar en esta materia. Incluso, nos han dicho que en el presupuesto del 2005 la partida para esa secretaría es inferior a la que tenía en 2004.

No hay posibilidad de usar instrumentos técnicos como los radares. Por las investigaciones correspondientes se sabe que una cantidad no menor de droga se comercia a través de aviones que aterrizan en cualquier parte del territorio nacional y, sin embargo, ni la policía ni los gobiernos tienen elementos para detectar la actividad de estos aviones portadores de droga. En una palabra, se trata de redefinir una nueva política, y en ese sentido creo que la desfederalización de este delito constituye un aporte para un seguimiento y una actitud más definida en cuanto a la represión de estos ilícitos, pero entiendo que no es suficiente.

Tendremos que estudiar, en el momento en que lo juzguemos oportuno, una nueva política de Estado para el tratamiento de las drogas. Y en su caso deberemos allegar los recursos que

reclama la lucha contra este crimen de características complejas y disímiles, y en el que existen muchas facetas difíciles de legislar. Esto es todo cuanto quería expresar, señor presidente.

—Ocupa la Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Sr. Presidente. — Dado que no se encuentra presente el señor senador Yoma, corresponde ceder el uso de la palabra al señor senador por Salta.

Sr. López Arias. — Señor presidente: voy a ser muy breve, dado que no estoy convencido de las bondades de este proyecto. Creo que la experiencia nos indica que cuando se trata de delitos complejos y de alta capacidad de organización se debe tender a unificar procedimientos y competencias más que a fraccionarlos.

En oportunidad de discutir del proyecto de ley antisequestros, ésta era la discusión al tratarse la cuestión de la ampliación de jurisdicciones. Temo entonces que con este proyecto de ley estemos avanzando en un sentido contrario al que deberíamos hacerlo.

Estoy convencido de que para una óptima utilización de todos los recursos, tanto nacionales como provinciales, en la lucha contra este flagelo que es el tráfico de drogas, hubiera sido mucho más eficiente la celebración de convenios entre la Nación y las provincias para brindar eficiencia a la utilización de todas las fuerzas disponibles.

De todas formas, entiendo la situación que afecta a la provincia de Buenos Aires y valoro enormemente el trabajo realizado en las comisiones para mejorar y dar mayor precisión a un proyecto que, sin duda, tal como ha venido a consideración de la Cámara, ha satisfecho muchas de las inquietudes que tenía respecto del proyecto original.

En consecuencia, por estas consideraciones y por la situación particular de algunos distritos y conglomerados, estoy dispuesto a acompañar con mi voto este proyecto, pero voy a proponer la incorporación, en el artículo 4º, de algunas normas prácticas de carácter procesal que permitirán evitar que la división de jurisdicciones genere espacios para las chicanas procesales o por la nulidad de actos que podrían perjudicar el objetivo querido por la ley. En consecuencia, voy

a formular estas propuestas en la discusión en particular, tratando de acompañar esta ley con mucha mayor tranquilidad de conciencia considerando que no se creará un espacio que perjudique el objetivo deseado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: deseo expresar algunas consideraciones respecto de este proyecto.

En primer lugar, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda debo señalar que no hemos tenido el giro de esta iniciativa para su estudio. No obstante, existe alguna incumbencia vinculada a los artículos 5º y 6º. En ese sentido, vamos a formular las observaciones pertinentes en la consideración en particular, porque pretendemos modificar la redacción de ambos artículos con el objeto de perfeccionarla técnicamente.

En primer lugar, respecto del artículo 5º queremos dejar expresa constancia de que cualquier transferencia de competencia, funciones o servicios que se realice, se encuentra en el marco del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Esta norma constitucional plantea específicamente en su quinto párrafo que no habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere, y por la provincia interesada o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso.

En el marco del tratamiento en particular voy a proponer la redacción concreta.

En segundo lugar, dado que se hace mención mediante el artículo 6º a la sustitución del artículo 39 de la ley 23.737 por otro artículo redactado, hay un último párrafo de ese artículo, que hace referencia a una cuenta que, en virtud de las modificaciones establecidas en el ámbito del presupuesto nacional, es inexistente.

Por lo tanto, vamos a proponer la eliminación del párrafo, con el objeto de que el Poder Ejecutivo, cuando del producido de estas acciones, del decomiso, se obtengan los recursos correspondientes, disponga su utilización en función de su carácter reglamentario.

No puedo dejar pasar esta oportunidad para formular algunas consideraciones que me pa-

recen importantes respecto de este proyecto de ley.

En primer lugar, creo que tenemos que asumir que el problema de la drogadicción en la República Argentina es grave. Es un flagelo que afecta sustancialmente a nuestra juventud, pero a gran parte de nuestra población también. Y quienes estamos radicados en provincias o áreas de frontera observamos este fenómeno con profunda preocupación. Entendemos que es absolutamente necesario disponer recursos, logística, infraestructura con el objeto de combatir tenazmente los problemas derivados del tráfico fronterizo.

Hemos tenido la oportunidad de coordinar una reunión con las fuerzas de seguridad de la región y pudimos conocer una presentación de la Fuerza Aérea Argentina acerca del plan de radarización. También conocimos con detalle una cuestión que es alarmante en nuestra región. Por un radar, que está funcionando en Resistencia y en Posadas hace tres meses durante seis horas, seis días a la semana, en un trimestre se identificaron 215 vuelos irregulares. Cada vuelo puede transportar 210 kilos de determinado tipo de sustancia. Y ese transporte puede ser de marihuana, de cocaína, contrabando de cigarrillos, pero también puede ser tráfico de armas. Si uno proyecta el monto total de este esquema de operación, se da cuenta de que hay un monto equivalente potencial de cerca de 500 millones de dólares en tráfico de distintas características y distinto tipo de sustancias o bienes. Eso implica que está gravemente involucrado determinado tipo de fuerzas que operan en las fronteras.

Nosotros tenemos, en el caso del Chaco, 83 kilómetros de frontera con nuestra hermana República del Paraguay. Hay un problema serio, que es la capacidad de actuación efectiva con respecto a estos vuelos clandestinos. La República Argentina necesita avanzar en reglas de empeñamiento adecuadas, necesita tener una legislación apropiada para combatir este tipo de vuelos. No tenemos la logística adecuada para lograr entorpecer acciones de estas características. Y esto es cada vez más preocupante.

El juzgado federal con sede en Resistencia, que es el único juzgado federal de la provincia del Chaco, que tiene casi 1.000.000 de habitantes, tiene 72.000 causas, de las cuales 9.000 son

causas de carácter penal y aproximadamente 8.100 son causas vinculadas con la droga. De manera que este esquema de un mecanismo de adhesión por parte de cada jurisdicción provincial es una herramienta y un instrumento. Obviamente, puede tener dificultades potenciales. Lo cierto es que la competencia provincial a los efectos de la orden de allanamiento que permita identificar luego, a través del procedimiento correspondiente, la finalización del proceso de acuerdo con la competencia y con todas las aclaraciones que tiene esta normativa, me parece un avance cualitativo importante. Pero me parece más destacable la necesidad de poner el esfuerzo para garantizar mecanismos de prevención, las inversiones necesarias para constituir una comunidad terapéutica para muchos de nuestros adolescentes o jóvenes que no encuentran una contención apropiada.

Me parece importante destacar que cuando uno advierte el gran número de jóvenes y adolescentes que no trabaja ni estudia y es también pasible de consumo, obviamente se siente muy afectado desde el punto de vista de la potencialidad con respecto al agravamiento de este conflicto.

También es importante resguardar el problema de la conexidad de este delito, fundamentalmente por su complejidad, y advertir que la competencia puede generar un problema, como en el caso del vínculo entre el narcotraficante, su red de distribución y su red de consumidores. Obviamente, la unificación de la competencia va a permitir identificar, a través del consumidor, al distribuidor correspondiente y a la red principal que provee la droga, o sea, al narcotraficante.

Entonces, consideramos que estaríamos ante una zona gris con respecto al canal de distribución y a la identificación expresa de los verdaderos peces gordos, que son quienes generan condiciones realmente preocupantes en el funcionamiento de esta cuestión.

Por eso, con las observaciones que en particular vamos a realizar desde el punto de vista estrictamente financiero, voy a brindar mi apoyo al presente proyecto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.

Sra. Leguizamón. – Señor presidente: he

sido parte y testigo del enorme esfuerzo efectuado para llegar hoy a este dictamen.

He escuchado dudas y visiones distintas durante el transcurso de este debate con respecto a cómo encarar este tema de alta sensibilidad para nuestra comunidad, pero me parece que hay dos puntos, en mi opinión, que son suficientes y otorgan solidez a la necesidad de crear esta herramienta.

En primer lugar, el conocimiento de que así como están las cosas, tampoco se alcanza a luchar contra los ejércitos silenciosos y anónimos conformados por los pequeños distribuidores de menudeo de drogas.

A su vez, se debe entender que el Poder Ejecutivo de la provincia con mayor población de nuestro país ha tomado la decisión de venir a solicitar a este honorable cuerpo la puesta en práctica de la construcción de esta herramienta.

Personalmente, creo que estas herramientas pueden servir. Lo digo desde un lugar en el que me he encontrado, en otras gestiones, con estas situaciones sin resolver. El fácil acceso a sustancias tóxicas que tiene hoy la franja de población joven, lamentablemente no sólo de la provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de ser juzgada por jueces que se encuentran a 200 kilómetros de distancia, determina que estos procedimientos terminen finalmente en la nada. Entonces, creo que la descripción de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires ha puesto en la agenda de nuestro Senado un marco de realidad.

Simplemente, quiero anticipar mi voto positivo a este proyecto. Creo que se trata de una herramienta que puede ayudar a una franja de la población muy vulnerable en la realidad y en el día a día, o sea, la de los jóvenes y adolescentes, quienes terminan siendo el último eslabón de la cadena de consumo de estos pequeños distribuidores que se instalan en el kiosco, en la esquina del colegio o en el bar de enfrente de la plaza y a quienes los adolescentes llegan sin ningún obstáculo. Todos saben quién es el que vende y ofrece la droga. Basta, simplemente, con pararse en la puerta de una escuela y preguntar.

Entonces, creo que éstas son las herramientas que ayudarán a esta población, que termina

siendo secuestrada por la droga, que termina perdiendo cualquier planificación de vida y cualquier proyecto, porque quedan literalmente secuestrados de esos proyectos de vida que nosotros planificamos desde los lugares mejor pensados pero que en la práctica tienen la realidad de encontrarse con este fácil acceso a los caminos que los distorsionan y que les imposibilitan llegar a esos proyectos de vida. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —a la que yo represento— no está excluida de esta situación. Todo el cordón del conurbano bonaerense anilla a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no hay una calle o una avenida que sea una división para un problema que nos trasciende territorialmente. Por eso, en ese sentido voy a apoyar la puesta en agenda que nos ha hecho la provincia de Buenos Aires.

Además, aprovecho la oportunidad para conectar este tema —que ha tenido mucha sensibilidad en esta tarde de debate— con la pronta sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que también afecta a esta franja de población tan vulnerable, de muchísimo impacto en nuestros programas sociales en el desarrollo de las generaciones futuras. También esas franjas de población están vulneradas, por no tener un sistema de responsabilidad civil y ser las destinatarias de las grandes organizaciones mafiosas del tráfico del menudeo de la droga.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: adelanto el voto negativo al proyecto en tratamiento.

Estamos trabajando sobre un despacho que hemos recibido como proyecto de dictamen casi al mediodía de hoy. Consideramos que la magnitud y la repercusión que va a tener en el orden judicial este proyecto ameritan una intervención y un análisis más minucioso. Inclusive el senador Capitanich termina de reconocer que su comisión, la de Presupuesto y Hacienda, ni siquiera había tomado intervención en este proyecto.

Yo, que participé en las reuniones y escuchaba la inquietud de la senadora Müller sobre la preocupación que tenían para atacar adecuadamente el flagelo de la droga en la provincia de Buenos Aires, sostengo que teníamos un camino mucho más lineal. Si el problema de la provincia de Buenos Aires era que la justicia federal estaba ubicada a 300 o 400 kilómetros,

en algunos casos, de los lugares en los que se cometía el hecho, hubiera sido mucho más procedente que abriéramos nuevos juzgados federales. Creo que es un gran esfuerzo, y esto realmente lo hemos demostrado en otras oportunidades. Hemos sido ágiles y rápidos para poder dar respuesta a esta necesidad. De modo tal que cuando un juzgado está saturado desde el punto de vista de su competencia y de su trabajo ordinario, le tenemos que dar respuesta; se trata de brindarle herramientas específicas y no trasladar esta responsabilidad a otros sectores. Ojalá que después no se nos sature la justicia ordinaria y nos tengamos que pasar a la justicia de faltas.

Esta es una iniciativa que, no obstante todos sus autores, aun el Poder Ejecutivo, abordaba una sola problemática: la de la desfederalización del proyecto de ley de estupefacientes. Hoy, de repente, se está modificando la ley penal. Además de no estar en los proyectos, apareció en la última semana en la mesa de discusión de las comisiones que lo estábamos tratando. Entonces, tenemos dos problemas. Por un lado, estamos dando competencia a las justicias ordinarias para que intervengan en los delitos previstos por la ley 23.737 y por el Código Penal, lo cual va a generar enormes problemas de competencia—hay doctrinarios que opinan que es inconstitucional— y va a significar que tengamos un mapa absolutamente diferente según si la provincia adhiere o no. En efecto, habrá provincias en las que tendremos jurisdicciones federales y provinciales diferenciadas, y otras en las que por falta de adhesión seguirá entendiendo la justicia federal. Es más: imagino la hipótesis de que, después de haber adherido a esta ley, algunas provincias, por mal funcionamiento o por resultado negativo en su funcionamiento, resuelvan volver al régimen anterior.

Hoy hablaba con altos funcionarios de la justicia federal de Córdoba y con altos funcionarios de la justicia ordinaria de Córdoba. En ambos casos me adelantaron que su experiencia les señalaba que para los cordobeses iba a significar un enorme conflicto y una enorme traba entre las justicias ordinaria y federal. Es más: uno de ellos me comentó que cuando empiecen a discutirse las competencias federal y ordinaria, según el nivel de los delitos, vamos a tener personas cinco meses detenidas sin saber cuál

es el juez natural que les corresponde. Sabemos que estos problemas de competencia se resuelven en la Suprema Corte.

A esta cuestión de la competencia tenemos que agregar la disminución de la pena que figura en el agregado al artículo 5º, en el cual se impone una pena de seis meses a tres años a quien entregue, suministre y facilite a título gratuito y ocasional..., lo cual nos genera, por lo menos, dos interrogantes. La ley en vigencia contempla perfectamente qué penas tiene quien distribuye gratuitamente. También la actual legislación contempla la hipótesis de quien hace una tenencia de estupefacientes en pequeña escala y en gran escala. También se prevé la pena para quien suministre, facilite o trafique con ella, pero el inciso e) lo único que hace es agregar la palabra “ocasional”, lo cual me sugiere una inquietud pensando en quienes tengan que juzgar determinado delito. ¡Qué difícil va a ser acreditar a un traficante importante de drogas que lo está haciendo únicamente a título ocasional! Va a ser muy difícil para los pesquisas juntar a todos los consumidores a quienes él sistemáticamente les vende para acreditar que no es en una ocasión a uno, sino que lo está haciendo en una cadena importante.

Sé que a las personas que consumen estupefacientes fundamentalmente hay que entenderlas en su enfermedad. Pero también es cierto que quienes están parados en las esquinas de las escuelas, muchas veces no son personas inocentes, sino verdaderos eslabones de un tráfico importante, por lo cual sería iluso pensar que lo hagan a título gratuito. Hoy me decía un funcionario judicial: “Carlos: en la droga no hay gratuidad. La droga es como el oro. Es un negocio: se trafica y se vende. Pensar que hay gratuidad es la puerta de escape de una persona para que diga: yo te la entregué a título gratuito y la falta de pruebas lo terminen canalizando en esa hipótesis de la cláusula penal”.

De modo tal que lejos, de resolver una situación—seguramente el Poder Ejecutivo nacional envió el proyecto para dividir las competencias según la gravedad de los delitos que se cometen—, a esta dificultad y controversia hoy le estamos agregando una modificación al tipo penal, por la cual los delitos que estaban gravados con penas de tres a doce años de prisión, hoy bajan de seis meses a tres años.

En razón de esto y de lo prematuro y reciente en que tuvimos el dictamen para poder analizarlo, es que adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.

Sra. Caparrós. – Señor presidente: quiero hacer un reconocimiento al trabajo llevado adelante por la comisión. Me consta que fue muy difícil consensuar este proyecto.

Adelanto mi voto afirmativo, a pesar de no tener la convicción absoluta de estar dando la mejor herramienta. No tengo la convicción de que no estemos aportando confusión al tema de las competencias y que generemos más problemas de los que hoy queremos solucionar.

Pero más allá de todas estas sensaciones que uno tiene, quiero decir que acompañaremos solidariamente a la provincia de Buenos Aires, que desde la urgencia y la ansiedad, a través de los intendentes, el ministro de Seguridad y el propio gobernador, ha planteado la necesidad de aprobar esta iniciativa.

Aparece como que están convencidos de que con ella se terminará el consumo de drogas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, yo creo que eso sería mirar la realidad con un solo ojo. Me parece que, más allá de las dudas desde el punto de vista legislativo y técnico que podamos tener, esta realidad no se cambia solamente con esta herramienta.

A lo largo de estos diez o quince años, con el Código Penal en la mano, nos hemos transformado de un país de tránsito de estupefacientes en uno de consumo. No se ha trabajado para contrarrestar esto y aparece hoy como que la única herramienta que solucionará esta problemática será este proyecto.

En nuestro país no hubo inversión en tecnología destinada al control de tráfico, y hoy tampoco se está hablando de esto. A su vez, no nos estamos refiriendo a efectuar mayor inversión en lo que es prevención primaria y secundaria. Quisiera saber cuánto se han multiplicado en los últimos años los centros de atención a pacientes. Quisiera saber cuántos recursos se invirtieron en lo que es el trabajo en los barrios, para saber por qué los chicos consumen. Entonces, yo hoy me pregunto: ¿van a dejar de consumir por la aplicación de esta norma; por

sancionar a los pequeños distribuidores? Creo que no.

Por otra parte, más allá de que hoy demos tratamiento a esta iniciativa, creo que éste es un buen momento para que repensemos este tema como una problemática global, a fin de darle la batalla que se merece, y que así como escuchamos a la Federación Argentina de Municipios, a los intendentes, al ministro de Seguridad y al gobernador, hagamos lo propio con lo que han planteado claramente en este recinto los señores senadores Escudero, Giustiniani y otros más.

Si no hacemos esto, habremos estado mirando la realidad con un solo ojo; habremos trabajado desde el Senado para dar respuesta a una urgencia planteada por una provincia de la Nación y no habremos solucionado nada.

Simplemente quiero plantear esto y reiterar que solidariamente vamos a acompañar la iniciativa, a pesar de que no tengamos la convicción de estar trabajando en la norma adecuada.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré muy breve, porque voy a solicitar autorización para insertar en el Diario de Sesiones toda la parte de mi discurso referida al análisis técnico de la norma.

Quiero plantear dos temas en lo que hace al proyecto que estamos tratando. En primer lugar, yo valoro muy fuertemente el trabajo que viene realizando el doctor Arslanian desde la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Creo que es una gestión valiosa, sincera y realizada con un enorme esfuerzo, por lo que le tengo mucha confianza en su trabajo a la cabeza de la seguridad en la provincia. Realmente, creo que hubiese correspondido y hubiese sido valiosa su presencia para debatir sobre esto con los demás bloques y con los integrantes de la Comisión de Legislación Penal. No tuvimos la oportunidad de discutir, conversar y plantear nuestras dudas al doctor Arslanian respecto del proyecto en cuestión.

Dicho esto, señalo que no voy a acompañar con mi voto este proyecto de ley. Acá hemos escuchado a muchos señores senadores y senadoras que van a acompañar con su voto esta iniciativa y que han planteado serias dudas so-

bre su eficacia. Ello demuestra, en principio, que se va a votar un proyecto de ley que entendemos dudoso en sus alcances y que, en muchos casos, consideramos que puede aumentar y dificultar las cuestiones de competencia y de eficacia en la lucha contra la droga y el narcotráfico. En particular, me refiero a lo que significa romper la cadena de investigación: o sea, pensar que hasta un punto determinado puede intervenir una competencia ordinaria y, a partir de allí, la competencia federal. Romper la cadena de investigación en este marco implica sacar esto del criterio federal, donde es mucho más posible determinar políticas conjuntas, centralizadas y eficaces para encarar esta lucha. A mí me parece que eso es un error y no me han llegado a convencer de lo contrario los argumentos que escuché. Lejos de ello, la mayor cantidad de jueces, fiscales y doctrinarios consultados han planteado muy serios reparos con respecto a este proyecto de ley.

Por último, voy a solicitar autorización para insertar en el Diario de Sesiones mi discurso sobre todos los temas técnicos que, según entiendo, van a causar una enorme confusión e importarán trabas en las investigaciones por cuestiones de competencia que no alcanzan a saldarse con el artículo 4º, que establece que en caso de duda prevalecerá la jurisdicción. Creo que de esta manera se va a discutir si hay duda o si no la hay y así las investigaciones sobre estos hechos quedarán trabadas por cuestiones de competencia, motivo por el cual, voy a votar negativamente este proyecto de ley, reiterando el pedido de inserción de la parte técnica de mi discurso.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: cerrando este importante debate, señalo que vamos a acompañar el presente proyecto de ley.

Creemos que la legislación de lucha contra la droga, la ley 23.737 y las sucesivas modificaciones, fueron una construcción normativa realizada sobre la base de que la Argentina era un país de tránsito. Por lo tanto, allá en la década del 80 se incorporó una legislación novedosa que tenía como finalidad apuntar fuertemente a la organización delictiva; incluso, a hacer el seguimiento por el territorio nacional, tratando de controlar la llegada de la droga a Europa o a los

Estados Unidos. Indudablemente, los institutos de la entrega vigilada, del arrepentido o del propio informante –que están vigentes en la normativa legal– apuntaban a luchar contra la organización.

Es cierto que la Argentina era un país de tránsito: además, eso lo decían las autoridades y las estadísticas en la materia. Pero yo creo que a comienzos del nuevo siglo nuestro país ya es de consumo. Más aún, es un país de un peligroso nivel de consumo. De manera especial, estamos viviendo en el conurbano bonaerense un proceso muy parecido –por supuesto, salvando las distancias– al que viven ciudades como Río de Janeiro o San Pablo, en Brasil, u otras ciudades de América Latina, donde el nivel de consumo y la venta de droga a menores en espacios públicos ya casi conforma un hecho habitual. Y esta lectura de la realidad obliga necesariamente a la adecuación de las normas.

Indudablemente, tenemos un problema en el marco de la competencia federal, no en las provincias del interior; no en territorios de las provincias denominadas “chicas”, donde indudablemente la competencia de la justicia federal es más que suficiente para abordar la problemática; provincias como Río Negro o el Chubut. Las provincias del Norte, más cercanas a la frontera, tal vez tienen una problemática mayor. Ahí hay casos de introducción de drogas desde otros países, especialmente en el norte; pero indudablemente, la justicia federal ha demostrado un nivel de competencia, de eficacia y de resultado. Tampoco se verifica en el escenario social un nivel de desarrollo del delito de la venta minorista –de la comercialización al menudeo– tan grande como en el conurbano bonaerense.

¿De qué se trata esta iniciativa? De dar instrumentos a la jurisdicción provincial para que pueda afrontar esta cuestión. Los representantes institucionales de la provincia, las autoridades de la provincia, la propia justicia provincial y la propia Policía Bonaerense no pueden dar respuesta adecuada a los requerimientos de los vecinos que saben que en el barrio –en tal quiosco, en tal calle, en tal lugar, a veces, cercano a las escuelas– se comercializa droga. En los barrios del conurbano esa identificación es muy cierta, muy directa. De hecho, no existe una respuesta eficaz de la justicia federal, porque hay catorce juzgados federales en un escenario

urbano de catorce millones de habitantes; catorce juzgados, catorce millones de habitantes.

Entonces, creemos que estamos dando una respuesta necesaria. Creemos que estamos brindando a la provincia un instrumento; vamos a ver cómo funciona. Siempre vamos a tener que estar atentos. Es dable esperar también que la provincia pueda responder a esta delegación desde el punto de vista del resultado; que pueda abordar las pequeñas cuestiones o los casos de menor cuantía; e indudablemente, que pueda fortalecer la actividad de prevención. Esto es que frente a la denuncia del vecino, inmediatamente actúe un juez que dé la orden de allanamiento y se pueda impedir que la droga llegue a los chicos, que llegue a la gente sana, continuando su efecto contaminante y agravante de las situaciones sociales que hoy se viven.

Así que estamos depositando en la provincia de Buenos Aires un instrumento. Esperemos que la provincia responda con resultados positivos. Esperemos que la policía esté a la altura de esta responsabilidad. Sabemos de la tarea que se está llevando adelante por parte del gobierno provincial en la depuración de los cuadros policiales. Esperemos que haya, entonces, una policía que pueda también actuar con responsabilidad de la mano de la tarea de los fiscales y del ministerio público. No nos olvidemos de que en la provincia de Buenos Aires está funcionando el sistema acusatorio y de que la orden de allanamiento la dan los jueces de garantía. Por eso, creo que tenemos que abrir un crédito. Tenemos que dar un instrumento a la policía de la provincia de Buenos Aires, a la jurisdicción provincial y al estado bonaerense para que puedan responder a esta situación grave que –reitero– en el escenario social de Buenos Aires está viviéndose con grandes dificultades.

Hoy he escuchado las alocuciones de los senadores preopinantes. Me parece importante para la prensa repetir lo que en su momento expresó la senadora Escudero, de mi bloque: no estamos bajando ninguna pena. Sí estamos creando una figura nueva. La figura de comercialización sigue manteniendo la pena de cuatro a doce años. Hago esta aclaración porque si no, mañana, algunos diarios mal intencionados van a decir: “El Senado bajó la pena”.

Entonces, un hecho positivo se puede convertir en negativo. Siempre hay gente que no

entiende nada y toma lo más fácil. Por lo tanto, me parece importante remarcar que no estamos bajando ninguna pena, sino creando una nueva figura penal: la del convite, la del amigo que le da droga a otro amigo para consumir.

Esa es la figura nueva, la cual es benigna e, indudablemente, no puede ser calificada de la misma forma que la comercialización. Es por eso que tiene una condena de 6 meses a 3 años, lo que la hace excarcelable.

Y esto, además, forma parte del fallo de la Cámara de Casación, la que ha interpretado correctamente esta figura penal. O sea, ya existen fallos en la Cámara de Casación por los que se atenúa la pena frente a lo que es el convite, que es la figura penal que estamos instalando normativamente.

No estamos bajando ninguna pena referida a la comercialización de droga, la que sigue siendo de 4 a 12 años. Digo esto porque sería inconveniente leer mañana algún título que vaya en esa línea.

Por lo tanto, en virtud de estos fundamentos, acompañaremos la aprobación de este dictamen, que esforzadamente se llevó adelante en las comisiones de Interior y Justicia –que preside el senador Agúndez– y en la de Seguridad Interior y Narcotráfico –presidida por la senadora Escudero–, lográndose conseguir un dictamen por unanimidad.

Pasaremos a la votación en general y luego en particular artículo por artículo, porque habrá algunas ligeras modificaciones.

Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.

Pasamos a votar las inserciones solicitadas.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones.¹

¹ Ver el Apéndice.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48 votos por la afirmativa y 5 por la negativa.

—El resultado de la votación surge del Acta N°...²

² Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. — Queda aprobado en general.

En consideración en particular.

—Se enuncia el artículo 1°.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: reitero lo que ya he manifestado.

El artículo 1° es igual al artículo 5°, inciso *e*), que nosotros estamos reformando. Hay que aclarar esto.

El artículo 5°, inciso *e*), de la Ley de Estupefacientes hace referencia a quien entregue, suministre o facilite a título oneroso, y establece la pena en 4 a 15 años. Simplemente, quiero dejar en claro esto. Y el inciso *e*), segunda parte, dispone que si es a título gratuito, le corresponden de 3 a 12 años.

Hago estas aclaraciones porque se ha dicho que se han bajado las penas. Por eso quería corroborar lo que dijo el presidente del bloque Justicialista.

En cuanto al convite —que no estaba previsto, era una laguna del derecho, pero sí figuraba en la jurisprudencia—, la iniciativa hace referencia a quien entregue a título gratuito y ocasional una escasa cantidad —lo que hace suponer que inequívocamente es para uso personal— y en este caso, la pena es de 6 meses a 3 años. O sea que no estaba contemplado en la Ley de Estupefacientes.

Simplemente quería aclarar esta cuestión porque se ha incurrido en una equivocación garrafal.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1°.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 49 votos por la afirmativa y 4 por la negativa.

—El resultado de la votación surge del Acta N°...¹

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 1°.

—Se enuncia el artículo 2°:

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: como se está votando por artículos, en su momento adelanté el voto negativo por parte del bloque de la Unión Cívica Radical al inciso 1), del artículo 2° que modifica el artículo 34, de la ley 23.737.

Es por ello que hago la aclaración de que el resto de los incisos los votamos afirmativamente.

Quisiera que me indicaran cómo puede ser aclarada esta situación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Propongo que se vote el artículo tal como está en el dictamen. Si no alcanzan los votos suficientes, se votaría la propuesta de la Unión Cívica Radical, que corresponde al dictamen en minoría.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. — Señor presidente: no quiero discutir la técnica sino el procedimiento.

Estamos en contra del inciso 1) y no del resto del artículo. Como el reglamento establece que se vote por artículos, ahí radica la dificultad. No queremos votar negativamente todo el artículo, porque ello no coincidiría con nuestra postura.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. — Señor presidente: es un tema muy claro.

Hay dos posiciones. Una, plantea votar el artículo tal como está redactado y la otra plantea votar el artículo como está, pero sin un inciso.

Son las dos propuestas las que deben ser sometidas a votación y la que gana es la que se impondrá como redacción definitiva del artículo.

Sr. Presidente. — Se va a someter a votación el artículo 2°, tal como figura en el dicta-

men y queda constancia...

Sr. Losada. – Si votamos por la negativa, quedará que hemos votado negativamente todo el artículo, algo que no es decisión de nuestro bloque.

Lo que votamos negativamente es un inciso. Votemos el inciso 1) y luego el resto del artículo.

Varios señores senadores. – Está claro.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo de la Cámara, se votará el inciso.

Sra. Escudero. – Señor presidente: lo que se propone es contrario al reglamento, pero lo vamos a aceptar.

Se votará, en primer lugar, el primer párrafo, que no posee incisos; luego, se votará el inciso 1) y para finalizar, en conjunto, el resto de los incisos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: quiero dejar planteada mi total oposición a que se vote por incisos o por párrafos.

La verdad es que si hay un reglamento es para cumplirlo. Quisiera encontrar una salida a esta situación, pero el reglamento específicamente establece que se vota por artículos.

De lo contrario, se podrían llegar a inventar formas de votar que, en este caso, solucionarían un problema, pero en otros casos, generarían algún inconveniente serio. Las formas hacen a los contenidos.

Entonces, me opongo a que se vote de esta forma y propongo que se lo haga como corresponde reglamentariamente.

Sr. Presidente. – Si hay una moción de orden para un apartamiento del reglamento y para que se vote por incisos y el cuerpo está de acuerdo, se puede votar.

Sr. Losada. – Precisamente, el reglamento establece que la última palabra la tiene el plenario. Eso vale más que el propio reglamento. Si se lo lee, se sabrá que es algo que habilita el propio reglamento. Entonces, no se pide nada que no pueda ser tratado como lo establece el reglamento.

No se inventa un reglamento, sino que se pide que el plenario modifique una forma de votar en una situación muy especial.

Sr. Presidente. – Hay una moción planteada para votar por incisos.

Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.

Sra. Ibarra. – Que se registre mi oposición a esta forma de votar.

Sr. Presidente. – Queda constancia.

Tiene la palabra la señora senadora Escudero, para aclarar el sentido de la votación.

Sra. Escudero. – Señor presidente: se va a votar primero el primer párrafo del artículo 2º, que dice: “Sustitúyese el artículo 34, de la ley 23.737, por el siguiente...”, y a continuación, el primer párrafo del artículo 34.

Eso se votaría en primer lugar.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Que quede constancia de que mi posición es la misma que la detallada por la señora senadora Ibarra.

Sr. Presidente. – Queda constancia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para votar por incisos. La moción que había quedado planteada.

Sra. Müller. – Señor presidente: el artículo 171 del reglamento dice: “La discusión en particular es en detalle, por artículo, período o parte, recayendo sucesivamente votación sobre cada uno”. Es decir, se habla de “período o parte”; por lo tanto, no estamos haciendo nada que no corresponda.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura del artículo 208 del reglamento.

Sr. Secretario (Estrada). – (*Lee*). El artículo 208 dice: “Toda votación se reduce a la afirmativa o negativa, precisamente en los términos en que está escrito el artículo, proposición o período que se vote”.

Sra. Conti. – Esto no es ni un período ni una proposición; es algo inconcluso que no dice nada.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: simplemente se trata de que el bloque de la minoría pueda expresar su posición sobre este tema; no vemos nada negativo en esta cuestión ni estamos vulnerando ningún reglamento. Quieren votar el inciso en forma negativa y desean dejar constancia de ello, para luego votar el artículo. Debemos avanzar, porque de lo contrario vamos a estar dos horas discutiendo esta cuestión.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora

ra senadora por Salta.

Sra. Escudero. – Señor presidente: a los efectos de agilizar la votación, propongo que se vote en primer término todo el artículo, con excepción del inciso 1°, y someter a una segunda votación el inciso 1°.

Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se va a votar en primer término todo el artículo 2°, salvo el inciso 1°.

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 50 votos por la afirmativa y 3 por la negativa. La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N°...²

² Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

A continuación, se va a votar el inciso 1° del artículo 2°.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 37 votos por la afirmativa y 16 por la negativa. La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N°...³

³ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito que se deje constancia de mi voto afirmativo.

Sr. Presidente. – Se deja constancia.

–Se enuncia el artículo 3°:

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires.

Sr. Müller. – Este artículo expresa: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, conocerá la jurisdicción federal cuando la causa tuviere conexidad subjetiva [falta la ‘b’, porque

el despacho dice ‘subjetiva’, de sujeto] con otra sustanciada en dicho fuero”.

Pero, además, se propone cambiar la palabra “jurisdicción” por la palabra “justicia”.

Sr. Presidente. – ¿Este texto está consensuado?

Sr. Escudero. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3° con la redacción propuesta.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 51 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N°...¹

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

–Se enuncia el artículo 4°:

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires.

Sr. Müller. – En este artículo, el proyecto expresa: “En caso de duda sobre la jurisdicción competente prevalecerá la federal”.

El texto propuesto es el siguiente: “En caso de duda sobre la competencia prevalecerá la justicia federal”.

Sr. Presidente. – ¿Existe acuerdo?

Sra. Escudero. – Aceptamos la modificación propuesta, señor presidente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. López Arias. – Señor presidente: quiero proponer algunas reglas prácticas para tratar de resolver problemas que seguramente se van a plantear en la aplicación de esta ley en materia de jurisdicción y competencia.

Hago la aclaración, señor presidente, de que esto no es invento mío. No es que se me ocurrieron estas normas. Están contenidas en muchos de los códigos de procedimientos. Algunas de ellas nacieron en el Código de Procedimientos nacional, otras en códigos provinciales. Pero

como ésta es una ley que va a regir relaciones interjurisdiccionales, frente a la diversidad de normas de procedimiento que existen en nuestro país, creo que es conveniente introducir esta normativa para evitar “chicanas”, confusiones y que se empantanen los juicios, convalidando realmente en los procedimientos la intervención del primer juez que toma conocimiento de la causa.

Leo lo más rápidamente que pueda esto que tendría que ser incorporado como párrafo subsiguiente del artículo 4º: “Las cuestiones de jurisdicción no suspenderán el curso de la instrucción, ni invalidarán los actos en ella cumplidos, debiendo continuar actuando hasta tanto el planteo sea resuelto el tribunal que primero conoció la causa. En caso de que dos tribunales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha, continuará interviniendo el requerido de inhibición.

”Las cuestiones de jurisdicción propuestas durante la etapa del plenario y antes de la audiencia de debate, suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente”. Hago la aclaración de que en el plenario es en el único caso en que puede provocarse la suspensión del procedimiento por razones obvias.

“Para todo lo no previsto en el presente artículo, deberá seguirse el procedimiento establecido por el código de procedimientos aplicable a la jurisdicción del juez que previno, o para el caso de que dos tribunales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha, a la del juez requerido de inhibición.

”La adhesión a la presente ley implicará la incorporación de sus preceptos de derecho procesal al ordenamiento jurídico provincial del Estado adherido”.

Sé que es complejo lo que estoy proponiendo. Tal vez en medio de la sesión no puedan aceptar este tema. Si no se hiciera así, señor presidente –aunque estoy convencido de que con esto vamos a resolver problemas que se van a plantear en el curso de las investigaciones–, si es que no fuera aceptado por la comisión, voy a pedir a los miembros de las comisiones respectivas que hagamos un estudio a fondo sobre esta norma de competencia, para dictar las leyes complementarias necesarias a fin de evitar justamente este tipo de problemas y de planteos.

Hace un rato escuchaba a algunos senadores, al senador Capitanich, la senadora Ibarra. Y reitero mi preocupación. Creo que en este tipo de delito complejo donde hay alta organización delictiva debería haber una tendencia a unificar procedimientos y jurisdicciones. El hecho de que estemos discriminando respecto de los delitos de menor cuantía no excluye que el menudeo, ese pequeño delito, sea la punta del hilo para la investigación de las grandes organizaciones delictivas.

Ya que estamos decididos a sancionar este proyecto de ley, que es la voluntad de este cuerpo, insisto en que estas normas prácticas procesales van a ser necesarias porque habrá choques de jurisdicciones. Hay normas distintas en las diferentes jurisdicciones. Y esto provocará conflictos que realmente pueden llegar a trabar los procedimientos en lugar de facilitar las investigaciones.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: agradecemos y apreciamos el aporte y el esfuerzo del senador López Arias, pero no creo que en este momento, en medio de la sesión, estemos en condiciones de aceptar las modificaciones que propone.

Los casos de conflicto de competencia que puede haber son entre la competencia federal y la competencia local. En esos casos, el único tribunal del alzada común es la Corte Suprema de Justicia. Por eso hemos tratado de establecer reglas claras de conexidad y de prevalencia para poder decir que, en caso de duda o de conexidad, va a la justicia federal, para que sean mínimos o menores los casos que tengan que llegar a resolución de la Corte Suprema. Pero una cámara de apelaciones local no puede decidir si la competencia es federal o provincial.

La última parte del artículo me parece que es un reenvío a las normas de conexidad, que estarían contempladas con el artículo 3º, cuando se establece que en caso de conexidad compete a la justicia federal. Sin perjuicio de eso, nos comprometemos a estudiar el tema para ver si se pueden proponer modificaciones más adelante.

Cuando empezamos a analizar los proyectos, allá por el mes de mayo, hicimos una consulta al

doctor Julio Maier, justamente por esta preocupación acerca de los conflictos de competencia que se podían plantear. El consejo que nos dio el jurista es que cuantos más requisitos se establezcan para determinar cuál va ser la competencia o para aprobar la incompetencia, más complejo y conflictivo se tornará el trámite. Por esa razón, por el momento, hemos tratado de elaborar una norma lo más clara posible.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: quiero aclarar que el señor senador López Arias me envió un informe sobre este tema, pero creo que, como ha expresado la señora senadora Escudero, después podemos confeccionar una norma sobre esta cuestión. Ahora creo que eso no es practicable, pues podemos contradecir algunas leyes, sobre todo en lo que respecta al fuero federal.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Señor presidente: quiero saber si quedó aprobada la propuesta de la señora senadora Müller...

Sra. Müller. – Sí...

Sr. Presidente. – Aprobada por parte de la señora senadora Escudero.

Ahora vamos a considerar la solicitud de abstención del señor senador López Arias.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 4°.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 50 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y una abstención. La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N° ...²

² Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 4°.

Corresponde considerar el artículo 5°, para lo cual se debe constituir la Cámara en comisión.

1

Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Corresponde constituir la Cámara en comisión para formular el dictamen y designar autoridades.

Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas sus autoridades para la conferencia.

2

Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.

Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: tal como manifestara en el tratamiento en general de este proyecto de ley, en virtud de lo establecido por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional y debido a que se trata de una ley de adhesión, es absolutamente imposible determinar con precisión el monto de las transferencias o las características de ellas.

Por lo tanto, vamos a sugerir a los efectos de perfeccionar el texto del dictamen de ambas comisiones una redacción alternativa, que es la siguiente: “Establécese un sistema de transferencias proporcionales a las jurisdicciones provinciales que adhieran y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la administración pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de Justicia, con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley”.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: entendemos que la redacción propuesta mejora el texto. A su vez, el señor senador Capitanich cree que hay provincias que no van a pedir refuerzos presupuestarios. Es muy optimista.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, queda cerrada la conferencia...

Sr. Escudero. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora

ra senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: como bien me acaba de señalar el señor senador Jaque, el texto debería hablar de las jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto.

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consecuencia, queda cerrada la conferencia.

3

Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.

Ahora corresponde someter a votación el artículo 5º.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 49 votos por la afirmativa y 3 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N°...³

³ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 5º.

Continuamos con el artículo 6º, que tiene modificaciones.

–Se enuncia el artículo 6º.

Sr. Capitanich. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: proponemos eliminar el último párrafo de la redacción de este artículo que dice que el producido de los recursos previstos en este artículo, por causas de jurisdicción federal o nacional, deberá ingresar en todos los casos en la cuenta especial 816, Productos varios del presupuesto general de la Nación.

En virtud de la inexistencia de esta cuenta y de que cada una de las jurisdicciones establecerá sus propios mecanismos de percepción, consideramos necesario eliminar este párrafo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Vamos a aceptar la modificación propuesta. En la norma nosotros transcribimos el artículo 39 tal como está en la redacción actual, agregando esta especificación para las provincias cuando sean ellas las que decomisan. Este último párrafo está copiado textualmente de la redacción actual, pero obviamente se estaba refiriendo al presupuesto y a la cuenta vigente en el momento de su sanción. Por lo tanto, pedimos que se vote con la eliminación del último párrafo del artículo propuesto.

Sr. Presidente. – Con las modificaciones propuestas por el senador Capitanich y aceptadas por el cuerpo, vamos a votar el artículo 6º.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 49 votos por la afirmativa y 3 votos por la negativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N°...⁴

⁴ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 6º.

–Se enuncia el artículo 7º.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 49 votos por la afirmativa y 3 votos por la negativa.

La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N°...⁵

–El artículo 8º es de forma.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

15

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Continuamos con el plan de labor.

Corresponde continuar con el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros sobre prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes...

Sra. Martín. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Martín.

Sra. Martín. – Señor presidente: solicito una pequeña interrupción para hacer un agradecimiento.

Circunstancias adversas en mi vida desde el 20 de enero me tuvieron retenida en mi domicilio. Ello me obligó a pedir sucesivas licencias que este cuerpo con gran prestancia me las acordó en forma inmediata. Les puedo garantizar que todas las muestras de afecto, de solidaridad, de cariño, recibidas en este tiempo han sido para mí un verdadero bálsamo del alma; y en enfermedades como la que he tenido que enfrentar, esto tiene una gran importancia, porque es un fortalecimiento que verdaderamente se necesita para poder luchar en mejor forma o con una mayor fuerza.

Por esta razón les voy a quedar siempre muy agradecida. (*Aplausos.*)

16

PREVENCIÓN DEL TURISMO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Turismo en el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros señores senadores sobre prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. (Orden del Día N° 1.102.)

–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Turismo han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros, expediente S.-324/03 sobre prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes y por las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.

Art. 2° – Se entiende por niños, niñas y adolescentes, contemplados en el artículo 1°, todas aquellas personas menores de dieciocho años de edad.

Art. 3° – Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo las actividades comprendidas en el artículo 1° de la ley 18.829, en el ámbito nacional o internacional, los medios de transporte, sea cual fuere su modalidad, sea nacional o extranjera, los hoteles o lugares de alojamiento y hospedaje, los bares, confiterías y restaurantes, deberán informar a sus clientes las consecuencias legales de la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes comprendidas en el título III, del libro segundo del Código Penal de la Nación.

La forma del suministro de esta información será implementada por la autoridad, competente en cada una de las materias enunciadas en el párrafo primero.

Art. 4° – La Secretaría de Turismo de la Nación y las autoridades competentes que corresponda según la materia, en cada jurisdicción serán los encargados de aplicar la presente ley. En cumplimiento de la misma, deberán supervisar e inspeccionar las actividades de promoción turística con el objeto de prevenir y denunciar la prostitución, el abuso sexual o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la presente ley y tipificadas en el título III, libro II del Código Penal de la Nación. Asimismo se debe denunciar y sancionar a las personas físicas y jurídicas que infrinjan las disposiciones de la presente ley.

La autoridad de la aplicación podrá ejercer la facultad de supervisión e inspección en forma conjunta y coordinada con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 5° – La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación deberá redactar un código de conducta dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de esta ley, respetando lo establecido por la declaración de la Organización Mundial del Turismo sobre la Prevención del Turismo Sexual Organizado (El Cairo, 1995), que será de estricto

147

APENDICE

I

Votaciones

Votación Nominal

122° Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04.)

VOTACIÓN EN GENERAL

Acta N°: I	Fecha: 06-10-2004	Hora: 20:26:38
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI Daniel	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	53	Votos afirmativos:	48
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	5
Total Presentes:	53	Abstenciones:	-
Ausentes:	19		
Votos Afirmativos Necesarios:	27	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04.)

VOTACIÓN EN GENERAL

Acta Nº: 1

Fecha: 06-10-2004

Hora: 20:26:38

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAPIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Della	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	NEGATIVO	MERA Mario Rubén	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AUSENTE
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Rubén	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Halde Della	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	NEGATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal**122° Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión****DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.****(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)****VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.1º**

Acta N°: 2	Fecha: 06-10-2004	Hora: 20:28:51
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI Daniel	Desempate: NO	

Presentes Identificados: 53**Presentes No Identificados: -****Total Presentes: 53****Ausentes: 19****Votos Afirmativos Necesarios: 27****Votos afirmativos: 49****Votos Negativos: 4****Abstenciones: -****RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA**

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.1º

Acta N°: 2

Fecha: 06-10-2004

Hora: 20:28:51

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	NEGATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSETTI, Ricardo Argentino	NEGATIVO	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	MERA Mario Rubén	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Rubén	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	NEGATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUITA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALLIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

122º Periodo Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04.)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.2º Inciso 2 a 6

Acta N° 3

Fecha: 06-10-2004

Hora:20:35:34

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Presentes Identificados: 53

Votos afirmativos: 50

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: 3

Total Presentes: 53

Abstenciones: -

Ausentes: 19

Votos Afirmativos Necesarios: 27

**RESULTADO de la
VOTACIÓN****AFIRMATIVA**

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.2º Inciso 2 a 6

Acta N°: 3

Fecha: 06-10-2004

Hora: 20:35:34

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI Daniel

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliána Della	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	MERA Mario Rubén	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Rubén	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belón	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Della	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUNTLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.2º Inciso 1

Acta Nº: 4	Fecha: 06-10-2004	Hora: 20:36:40
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI Daniel	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	53	Votos afirmativos:	37
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	16
Total Presentes:	53	Abstenciones:	-
Ausentes:	19		
Votos Afirmativos Necesarios:	27	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

	Versión Original	Actual
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AUSENTE	AFIRMATIVO

Observaciones:

La Senadora Colombo de Acevedo ingresa ya iniciada la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.

Modificaciones realizadas el 06/10/04

Presentes Identificados:	53	Votos afirmativos:	38
Presentes No Identificados:	1	Votos Negativos:	16
Total Presentes:	54	Abstenciones:	-
Ausentes:	18		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.2º Inciso 1

Acta N°:4 Fecha: 06-10-2004 Hora: 20:36:40

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo. Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOI Daniel Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	NEGATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
AVELIN, Nancy	NEGATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Della	NEGATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	NEGATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	NEGATIVO
GIRI, Haide Della	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RIOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	NEGATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, Maria Dora	NEGATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz Maria	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	NEGATIVO
LEGUIZAMON, Maria Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	NEGATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	NEGATIVO	ZAVALIA, José Luis	NEGATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.3º

Observaciones: con modificaciones.

Acta Nº: 5

Fecha: 06-10-2004

Hora:20:37:50

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Presentes Identificados: 54

Presentes No Identificados: -

Total Presentes: 54

Ausentes: 18

Votos Afirmativos Necesarios: 28

Votos afirmativos: 51

Votos Negativos: 3

Abstenciones: -

RESULTADO de la
VOTACIÓN **AFIRMATIVA**

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04.)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.3º

Observaciones: con modificaciones.

Acta Nº: 5

Fecha: 06-10-2004

Hora: 20:37:50

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes.

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAFIERO, Antonio Franc	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	MERA Mario Rubén	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

122° Período Legislativo - Ordinario - 21° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04.)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.4º

Observaciones: con modificaciones.

Acta Nº: 6

Fecha: 06-10-2004

Hora:20:45:52

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Presentes Identificados: 54

Votos afirmativos: 50

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: 3

Total Presentes: 54

Abstenciones: 1

Ausentes: 18

Votos Afirmativos Necesarios: 27

**RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA**

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04.)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.4º

Observaciones: con modificaciones.

Acta Nº: 6

Fecha: 06-10-2004

Hora:20:45:52

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Presentes Identificados: 54

Votos afirmativos: 50

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: 3

Total Presentes: 54

Abstenciones: 1

Ausentes: 18

Votos Afirmativos Necesarios: 27

RESULTADO de la
VOTACIÓN **AFIRMATIVA**

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04.)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.4º

Observaciones: con modificaciones.

Acta N°: 6

Fecha: 06-10-2004

Hora: 20:45:52

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Della	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	MERA Mario Rubén	AFIRMATIVO
CASTRO, Maria Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIDEO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Della	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	ABSTENCION	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.5º

Observaciones: con modificaciones.

Acta Nº: 7

Fecha: 06-10-2004

Hora:20:48:58

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Presentes Identificados: 52

Votos afirmativos: 49

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: 3

Total Presentes: 52

Abstenciones: -

Ausentes: 20

Votos Afirmativos Necesarios: 27

**RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA**

Votación Nominal

122° Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.5º

Observaciones: con modificaciones.

Acta N°: 7

Fecha: 06-10-2004

Hora: 20:48:58

Tipo de Quorum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AUSENTE	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliana Della	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	MERA Mario Rubén	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Marganta	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, Maria Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Della	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, Maria Dora	AFIRMATIVO
JAEQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.6º

Observaciones: con modificaciones.

Acta N°: 8	Fecha: 06-10-2004	Hora: 20:51:01
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI Daniel	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	52	Votos afirmativos:	49
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	3
Total Presentes:	52	Abstenciones:	-
Ausentes:	20		
Votos Afirmativos Necesarios:	27	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.6º

Observaciones: con modificaciones.

Acta N°: 8

Fecha: 06-10-2004

Hora: 20:51:01

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AUSENTE	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliana Della	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	MERA Mario Rubén	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Della	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itati	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALLIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.7º

Acta Nº: 9	Fecha: 06-10-2004	Hora:20:51:41
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI Daniel	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	52	Votos afirmativos:	49
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	3
Total Presentes:	52	Abstenciones:	-
Ausentes:	20		
Votos Afirmativos Necesarios:	27	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 21ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 23737 - ESTUPEFACIENTES - EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS.

(S-1222/03, S-1681/03 Y PE-183/04.)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ART.7º

Acta Nº: 9

Fecha: 06-10-2004

Hora:20:51:41

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AUSENTE	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AFIRMATIVO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AUSENTE	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AUSENTE
CAPARRÓS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Lilliana Della	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	AFIRMATIVO	MERA Mario Rubén	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AUSENTE
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Lilliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Halde Della	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AUSENTE	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAUQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENESES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itatí	AUSENTE	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AUSENTE
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALLIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

117
**Transferencia de un inmueble a la Municipalidad
de Río Grande, Tierra del Fuego**

–El texto del proyecto de ley sanciona-
do es el que figura en la pág. ...

118
**IV Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes
de Derecho Constitucional**

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. ...

119
Obras viales en Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. ...

120
Día de las Bibliotecas Populares
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. ...

121
Día Internacional de la Paz
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. ...

123
Día Mundial del Alzheimer
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. ...

124
**Centenario de la Biblioteca Popular
“Bernardino Rivadavia”, Córdoba**
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. ...

125
Día Internacional de la Paz (continuación)
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. ...

126
Plan Nacional Indígena
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. ...

127
Resolución 5/95
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. ...

128
**Incorporación de Patricia Himschoot
a la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente**
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. ...

129
**Curso “Calidad del servicio de sistemas
eléctricos de potencia”**
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. ...

130
XII Edición Internacional Ferichaco 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. ...

131
Programas para recuperar la enseñanza técnica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. ...

132
Garrafa social
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. ...

134
XIX Encuentro Nacional de Mujeres
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. ...

135
Día de las bibliotecas populares
–El texto del proyecto de declaración aprobado
es el que figura en la pág. ...

III
INSERCIONES

1
Solicitada por la señora senadora Ibarra
Inserción de la senadora Vilma Ibarra.

Sesión ordinaria del 6 de octubre de 2004 - Modificación de la ley 23.737 (de estupefacientes) (S.-1.222/03, S.-1.681/03 y P.E.-183/04).

Las iniciativas mencionadas persiguen reorganizar la competencia judicial fijada por la ley 23.737, resultando ser ésta federal para el juzgamiento de todas las conductas previstas en esa norma.

A grandes rasgos, se pretende conservar bajo la órbita de la justicia federal la persecución de los hechos delictivos graves, como el tráfico, comercialización a gran escala, y dejar a las justicias locales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la intervención en los delitos menores, como la simple tenencia, la tenencia para uso personal, el comercio menor.

El texto de ley propuesto aconseja la reforma a dicho cuerpo legal a fin de otorgar la posibilidad de someter, por ley de adhesión, a la justicia ordinaria, el juzgamiento de los delitos previstos en los artículos 5º, incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes, fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor ambos dentro de determinadas cantidades, penúltimo y el nuevo último párrafo, 14 y 29 de la ley 23.737, y en los artículos 204, 204 bis, 204 ter, 204 quáter del Código Penal.

Sin pretender abordar el debate sobre la constitucionalidad de dictar leyes que impongan sobre ciertas materias la competencia judicial federal, ni sobre la constitucionalidad de penalizar el consumo personal de estupefacientes, analizando la cuestión desde la concreta y efectiva aplicación de la ley, la propuesta de modificación puede traer inconvenientes en la aplicación práctica.

No merece mayores comentarios la incorporación del último párrafo del artículo 5º de la ley 23.737. El texto propuesto viene a cubrir un vacío legal, incorporando un nuevo tipo pena: la entrega, suministro o facilitación ocasional y a título gratuito, en escasa cantidad para uso personal, reprimiéndolo con una pena de prisión de seis meses a tres años, aplicando, si correspondiere, los artículos 17, 18 y 21. Así, se diferencia claramente estas conductas de las previstas en tipo penal de la segunda parte del inciso e) del artículo 5º: entrega, suministro, aplicación o facilitación a título gratuito, reprimida conclusión o prisión de tres a doce años y multa.

Distinta es la situación respecto de las reglas de competencia pretendidas, más teniendo en cuenta que la finalidad última de las normas represivas sobre este tópico debe estar orientada a la lucha transnacional contra el narcotráfico, y no meramente a la represión del pequeño consumo.

En lo que respecta al acápite del artículo 34 que se propone modificar, se advierte que con la desfederalización parcial –la que parece no tener objeción desde el punto de vista constitucional– se deja librado a las legislaturas locales la adhesión a este

régimen, por lo que para algunas jurisdicciones locales todos estos delitos pueden seguir siendo de competencia federal, y para otras ordinaria, por haber adherido a estas disposiciones. Considerando que una de las características más habituales de estos delitos es la transnacionalidad, y que muchas veces trasciende las propias fronteras provinciales, lo que haremos es entorpecer la investigación judicial con obstáculos de índole formal.

El inciso primero del artículo 34 en cuestión indica la desfederalización para los incisos c) y e), cuando se comercie, entreguen, suministren o faciliten estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.

Una primera advertencia es respecto a la descripción del tipo “comercie” estupefacientes fraccionados en dosis. Pueden presentarse ciertas dificultades en la aplicación, ya que no siempre la comercialización implicará la incautación de estupefacientes. Hubiese sido más conveniente establecer que “los tenga con fines de comercialización”, ya que en este caso siempre estará presente la sustancia pasible de ser analizada (fraccionada en dosis destinada al consumidor o no) a fin de deslindar competencia.

Sin perjuicio de lo expuesto, también debe analizarse el criterio de deslinde de competencia propuesto: “estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Muchas alternativas se evaluaron en las reuniones de comisión para encontrar un corte posible para establecer la competencia, ninguna resultó satisfactoria, incluida la elegida que se independiza de la cantidad de dosis incautadas reparando sólo en la forma de presentación de los estupefacientes.

El artículo 3º propuesto prevé que, sin perjuicio de la desfederalización parcial por adhesión de las jurisdicciones locales, igualmente “conocerá la jurisdicción federal cuando la causa tuviere conexidad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero”.

En el orden federal las reglas de conexidad están previstas en los artículos 41, 42 y 43 del Código Procesal Penal. La conexidad objetiva se regula en los artículos 41, incisos 1 y 2, y 42, con las salvedades señaladas en el artículo 43, y la conexidad subjetiva está regulada en el inciso 30 del artículo 41.

Conforme el texto propuesto, si a una persona se le imputaren varios delitos, y existen causas en la jurisdicción federal y también en la ordinaria, conocerá la federal. Ahora bien, cabe preguntarse sobre qué justicia conocerá en los casos de conexidad objetiva. La norma nada dice al respecto, habilitando interpretaciones disímiles, tales como inferir que en los casos de conexidad objetiva deberá estarse a lo que prescriben los distintos códigos procesales locales al respecto, si es que se trata de una jurisdicción adherida, o bien inferir, contrario sensu, que entenderá la jurisdicción local adherida, por haberse excepcionado sólo la conexidad subjetiva. Estas

interpretaciones posibles abonan aún más la incertidumbre sobre la competencia.

Por otro lado, no pocos problemas de competencia se generarán en los casos en que la autoridad preventora no coincida con la justicia que deba entender. Es lo que intenta salvar el artículo 4º propuesto (en caso de duda prevalecerá la jurisdicción federal), pero no logra su cometido porque el planteo de la duda ya será judicial. Es decir, no se evita el procedimiento previo para decidir la competencia, toda vez que la norma está dirigida al intérprete, que por supuesto es el juez.

Por todo lo expuesto, considero que las reglas que se pretende forjar generarán inagotables planteos de incompetencia que atentarán contra la finalidad primordial de desbaratar el narcotráfico.

Vilma L. Ibarra.

ACLARACIÓN:

La senadora solicitó en su disertación de la sesión del día 6/10 que se insertara la siguiente nota de opinión al finalizar su discurso.

Ref.: proyecto de ley S.-324/03; Orden del Día N° 1.102/04.

Las niñas en el turismo sexual, por Eva Giberti. Publicada en el diario "Página/12" del día 12 de mayo de 2004.

"El territorio es el cuerpo de las niñas y el de las adolescentes. Lo transitan los clientes que las eligen porque son seguras: están sanas –diferenciándose de las criaturas del Tercer Mundo infectadas por el VIH y otras infectocontagiosas– y porque son obedientes y manipulables.

"Además, siempre constituyen una novedad para el varón ansioso de ejercer poder y disfrutar de un maltrato naturalizado por la sociedad. Que finalmente llega a ser naturalizado por las niñas, quienes lo admiten como una forma de trabajo, un ganapán como cualquier otro. Ni los clientes ni las niñas prostituidas están solos en esta concepción laboralista: la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también considera que la prostitución es un trabajo para las niñas, pero neutraliza la gravedad de la práctica que avala semánticamente al denominarla trabajo al clasificarla dentro de las 'peores formas de trabajo infantil' (Convención 182). Quizás habría que mejorarlo para que fuese menos 'peor', pero trabajo al fin. Tal vez se podría crear una Asociación de Meretrices de Ciclo Inicial para que fuesen ascendiendo, pasando de grado o cursando nuevos aprendizajes que les permitiesen culminar en la adultez habiendo adquirido experiencia laboral acorde con la definición de la OIT. Aunque de la filosofía de la organización internacional y de sus recomendaciones se desprenda su oposición a la prostitución a la que son arrastrados niñas y niños, el lenguaje, como ya lo dijo Barthes, carece 'de ino-

cencia y de ingenuidad'.

"En este modelo se trata de una actividad por cuya práctica se obtiene dinero. Que no está destinado al mejoramiento del estado de la niña sino al rufián que la supervisa. En oportunidades, su propia familia.

"El tema es antiguo e involucra a diversas culturas. El común denominador es una criatura, habitualmente una niña, y un hombre o varios que disponen de ella. Sumergido en el silencio y en la complicidad de los adultos, el alquiler de niñas para el turismo sexual ha sido denunciado reiteradamente. Las técnicas son varias: los representantes de las criaturas las ofrecen a los clientes que las llevan consigo para vacacionar juntos durante una temporada (es un sistema largamente descrito por revistas europeas), o bien cuando llega un *tour* de visita a un país los choferes que los trasladan o los conserjes de los hoteles reconocen a quienes pueden ofrecerles el producto. Quedan excluidos de este artículo quienes no proceden de este modo. Pero conociendo las estrategias, la Asociación de Ejecutivos de Empresas Turísticas puso en juego el III Foro Nacional y I Foro Internacional (AFEET) dedicado a la Concientización y Prevención de la Explotación Sexual de los Niños en Turismo. La información que de allí procede, a cargo de quienes cuentan con experiencia, puede servir como alerta para quienes aún están distraídos creyendo que la prostitución a la que se arrastra a niñas y niños constituye un fenómeno 'entre la gente pobre, que no tiene principios morales'. No se trata de la gente pobre pero sí de las personas excluidas, sumergidas en el hambre y en la miseria social que constituyen el principal venero de donde proceden estas pequeñas víctimas. Lo cual suele constituir una preocupación extra para los rufianes, puesto que deben refinar a algunas de sus pupilas antes de entregarlas.

"¿Qué les sucede a estas niñas inmersas en la promiscuidad prostibularia?

"Algunas de ellas y no pocas han sido violadas, es decir, incestuadas por sus padres a la edad de cinco o seis años, continuando con la experiencia hasta la pubertad. De modo que ingresan en la práctica conociendo la mecánica. Previamente y de la mano de su papá conocieron el dolor físico, el asombro, el miedo y la humillación: aprendieron que no debían hablar de 'eso'. El aturdimiento, ante un procedimiento desconcertante, suele generar algo semejante a una falta de conciencia, o sea una manera de defenderse intentando 'no darse cuenta' de lo que les pasa. Se trata de una sensorialidad sin registro representacional: les resulta difícil verse a sí mismas en esa escena que están protagonizando. Se asemeja a un estado de obnubilación sin perder lucidez para la convivencia a la que están obligadas.

”El fenómeno puede encontrarse en las niñas prostitutas cuando acumulan estas prácticas y no aciertan a describirlas a pesar de contar con lenguaje suficiente. En cambio utilizan expresiones genitalizadas, incorporan palabras no habituales en el lenguaje de una niña de diez años, por citar una edad, cuando conversa con un adulto.

”Estas niñas, que son rebautizadas con sus nombres ‘de guerra’, que ostentan como una adquisición, aprenden a reconocer el poder que adquieren sobre los varones que las utilizan: se sienten necesarias y describen a ‘los tipos que están esperándolas’ para ‘pedirles cosas’. Cuentan con una curiosa conciencia de su esclavitud: saben que no pueden escapar (algunas de ellas lo intentaron y terminaron violentamente golpeadas) y al mismo tiempo intentan jerarquizar su actividad como ‘un trabajo cualquiera’.

”Entre las niñas que son prostitutas y permanecen en los barrios, al servicio de los varones de entrecasa, y las que son victimizadas por los que vienen del exterior mediante el turismo sexual, hay diferencias cualitativas. Las que se ofrecen a los turistas reciben otros cuidados por parte de la patronal, inclusive en materia de ropa y salud: difícilmente concurren a un hospital, ya que desde sus profesionales pueden surgir las denuncias comprometedoras.

”Pero cualquiera sea la posición, el trauma que provoca la acción sistemática del cuerpo masculino sobre, contra y dentro del cuerpo de la niña puede generar una angustia desmesurada que le resulta sumamente complejo procesar.

”De allí su dificultad para evocar los sucesos que protagoniza; queda aprisionada por la impronta pulsional que surge como efecto de ese cuerpo a cuerpo desmedido y no pocas veces cruel. El Consejo de los Derechos del Niño, la Niña y la Adolescencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene una campaña de esclarecimiento y avanza en el intento de conectarse con estas víctimas, para lo cual el compromiso de la comunidad, denunciando, es clave. Pero contamos con un inconveniente que parece insalvable. Utilizar a las niñas en la prostitución es un hecho naturalizado por la comunidad, que es de donde provienen los clientes, los de entrecasa y los que viajan. La enfermedad, la corrupción y la desdicha que progresivamente se instalan en la vida de estas víctimas son una producción comunitaria. Que la comunidad podría regular si se interesase por esas niñas que han sido decretadas personas aptas para el placer masculino; son personas puesto que la prostitución no las cosifica; entonces el varón encuentra placer en utilizarlas porque, justamente, son personas aunque esclavizadas y no objetos a merced de su violación.”